

# PROGRAMA DE MODERNIZACION PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(HO-0109)

## RESUMEN EJECUTIVO

**PRESTATARIO:** República de Honduras

**ORGANISMO EJECUTOR:** Corte Suprema de Justicia de Honduras

**MONTO Y FUENTE:**

BID:	US\$7.200.000 (SF)
Aporte local:	US\$ 800.000
Total:	US\$8.000.000

**PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:**

Plazo de amortización:	40 años, incluyendo 10 años de período de gracia.
Período de desembolso:	4 años
Tipo de interés:	1% durante el período de gracia y 2% durante el período restante.
Inspección y vigilancia:	1%
Comisión de crédito:	0,50%

**OBJETIVOS:** El objetivo global del Programa es apoyar al Gobierno de Honduras en sus esfuerzos para modernizar la administración de justicia, con la finalidad de crear un sistema judicial más eficiente y confiable que fortalezca el estado de derecho, facilite el acceso para todos los ciudadanos y mejore el clima para la inversión. El Programa tendrá los siguientes objetivos específicos: (i) ayudar al país a modernizar su legislación vigente; (ii) mejorar la eficiencia de la estructura administrativa del Poder Judicial; y (iii) facilitar el acceso a la justicia, especialmente a personas de escasos recursos.

**DESCRIPCION:** Para cumplir con los objetivos propuestos, el programa tendrá tres componentes básicos:

Modernización del Derecho: Se contempla la preparación y aplicación de (i) nueva Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; (ii) nueva Ley de la Jurisdicción Constitucional; y (iii) nuevo Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, se prevé la preparación y aplicación de legislación sobre prevención y sanción de la violencia doméstica, la difusión e implementación del nuevo Código del Niño, y el desarrollo de nueva legislación para el fomento de inversiones.

Fortalecimiento Institucional: Se procura mejorar la eficiencia administrativa del Poder Judicial mediante el fortalecimiento de sus sistemas de planificación, recursos humanos y computación. Las actividades incluyen el mejoramiento de la Escuela Judicial y la unidad de capacitación del Ministerio Público.

Acceso a la Justicia: Incluye actividades en tres áreas principales: (i) fortalecimiento de la Defensa Pública; (ii) realización de proyectos piloto en materia de conciliación y mediación en los Consultorios Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en la Secretaría de Trabajo; (iii) un proyecto piloto de arbitraje comercial en las cámaras de comercio; y (iv) subcomponente de infraestructura consistente en la construcción de Salas de Audiencia para Juicios Orales y de Juzgados de Paz en municipios del país.

Una parte sustancial del Programa sería financiado con una Cooperación Técnica no reembolsable (CT-95-04-06-1). Esta CT incluye la totalidad del componente de Fortalecimiento Institucional más aquellas actividades del tercer componente dirigidas a fortalecer los esfuerzos de la Secretaría de Trabajo, los Consultorios Jurídicos de la UNAH y la Defensa Pública.

El Programa recibiría también financiamiento proveniente del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que sería destinado al establecimiento del Sistema de Arbitraje Comercial arriba mencionado, incluyendo el desarrollo de la legislación correspondiente.

**CLASIFICACION  
AMBIENTAL:**

El Comité de Medio Ambiente en la reunión del 1° de febrero de 1995, clasificó esta operación en la Categoría II.

**BENEFICIOS:**

El Programa propuesto apoyará el desarrollo de acciones concretas dirigidas a mejorar el sistema de administración de justicia hondureño. Se contribuirá al mejoramiento del clima para inversiones en el país a la consolidación del estado de derecho, y al fortalecimiento del sector en términos de mayor independencia y mejor funcionamiento. Además, los nuevos mecanismos permitirán fortalecer institucionalmente las estructuras administrativas de planificación, gestión y control, los sistemas de información y el manejo de los recursos humanos. Por otra parte, el financiamiento destinado a mejorar el acceso a la justicia apoyará a instituciones que están dedicadas a brindar ayuda a las personas de

escasos recursos, entre las cuales las mujeres constituyen un número considerable. También se institucionalizarán mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. En infraestructura, la construcción de los Juzgados de Paz ayudará a asegurar el acceso a la justicia en los municipios del país, mientras que la construcción de Salas de Audiencia responde a legislación que introduce juicios orales, la cual hará posible una justicia más transparente y eficiente.

**RIESGOS:**

El riesgo principal del Programa está relacionado con las reformas de carácter legal que se plantean en la operación. Siendo el Poder Legislativo el que debe aprobar dichas reformas, existe la posibilidad de que no se logre suficiente consenso político para avanzar sobre las mismas. Asimismo, los gastos de mantenimiento y personal requeridos para los Juzgados de Paz y Salas de Audiencia a ser construidos, representa un incremento en los costos recurrentes del poder judicial. Sin embargo estos riesgos se ven aminorados porque: (i) el Gobierno ha asignado un alto grado de prioridad al mejoramiento de la administración de justicia; (ii) los partidos de la oposición, el Colegio de Abogados, las facultades de derecho, el sector privado, y los demás sectores de la sociedad hondureña han manifestado ya su apoyo a todas aquellas acciones dirigidas a mejorar el sistema; (iii) la historia presupuestaria del Poder Judicial ha sido debidamente analizada, estimándose que el mismo tendrá capacidad para absorber los costos recurrentes generados por las nuevas construcciones; y (iv) existe la voluntad política de otorgar el 3% del presupuesto nacional al Poder Judicial en 1997, lo cual consolidará una situación presupuestaria para instrumentar este Programa.

**POBREZA:**

Un 74% de las familias hondureñas viven en pobreza y un 60% se encuentran en situación de extrema pobreza. En términos generales el presente Programa por sus características, beneficiaría por igual a la población de Honduras y además, cuenta con algunos componentes que beneficiarán directamente a la población más pobre. El Programa califica como focalizado a la pobreza, dado que más del 50% de los beneficiarios son pobres.

**ESTRATEGIA DEL  
BANCO EN EL PAIS  
Y EN EL SECTOR:**

La estrategia del Banco para Honduras está orientada a: (i) desarrollar el capital humano, para lo cual se promoverán proyectos sociales; (ii) aumentar la productividad de la inversión, mediante apoyo a programas de privatización, promoción de inversión privada, mejora de eficiencia estatal, promoción de

exportaciones y capacitación laboral, y (iii) eliminar las restricciones financieras, para lo cual apoyará programas que restauren la solvencia estatal. Un sistema de administración de justicia moderno y eficiente constituye una parte vital para llevar a cabo dicha estrategia.

En relación a esta estrategia es importante destacar que a partir de la octava reposición de recursos, los países miembros del Banco han enfatizado la necesidad de consolidar el Estado de Derecho como una condición para el funcionamiento eficiente de la economía. Por tanto la modernización del Estado debe ser integral e incluir todo el ambiente institucional y normativo que rodea la actividad económica social y política. El Banco ha venido apoyando al Gobierno de Honduras en la modernización del Estado como uno de los aspectos centrales de su estrategia de desarrollo. En diciembre de 1995, el Banco aprobó el proyecto de Reforma del Sector Público, como un primer paso en apoyo a dicha estrategia. El presente proyecto, que apoya la modernización y fortalecimiento del sistema judicial como parte del proceso de consolidación del Estado de Derecho, forma por lo tanto parte de la estrategia del Banco y del país.

**CONDICIONES  
CONTRACTUALES  
ESPECIALES:**

Condiciones contractuales antes del primer desembolso. El Prestatario deberá demostrar que: (i) ha tomado las medidas legales necesarias para transferir al organismo ejecutor los recursos del financiamiento del Banco y de la contrapartida local y el organismo ejecutor ha asumido las obligaciones que le corresponden como tal (ver p. 3.1); (ii) el organismo ejecutor ha suscrito acuerdos de coordinación con el Ministerio Público, la Defensa Pública la Universidad Nacional de Honduras, la Secretaría de Trabajo y Junta Nacional de Bienestar Social (ver p. 3.15); y (iii) el organismo ejecutor ha creado la Unidad Ejecutora del Programa (ver p. 3.19).

El contrato de préstamo también contendrá las cláusulas estándar del Banco relativas a: auditoría, inspecciones, mantenimiento, adquisición de bienes y servicios y reembolso de gastos con cargo de financiamiento y a la contrapartida local.

Otras condiciones contractuales especiales. Un mes antes de la conclusión de cada año de ejecución, el prestatario enviará al Banco un informe que incluya el grado de cumplimiento de las metas previstas para el año anterior, así como un Plan de Trabajo (PAT) para el próximo año. La aprobación por el Banco de dicho PAT será condición previa a los desembolsos para el año siguiente. (ver p. 3.23).

## I. MARCO DE REFERENCIA

### A. Introducción

- 1.1 Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. En 1994, el ingreso per cápita ha sido estimado en US\$593. Se calcula que más del 50% de sus 5.5 millones de habitantes vive en una situación de pobreza, un 80% habita en zonas rurales, y alrededor del 32% de la población adulta es analfabeta. La economía es básicamente agropecuaria siendo los productos de exportación más importantes, el café y el banano. Sin embargo, en los últimos años los sectores que han tenido un crecimiento más dinámico son las exportaciones no tradicionales, la industria de la maquila, y el turismo.
- 1.2 Durante la última década, Honduras se ha caracterizado por tener: (i) una tasa de crecimiento económico inferior a la experimentada por el crecimiento poblacional; (ii) desequilibrios macroeconómicos de mediano plazo cada vez más agudos. Han sido identificados como una de las causas principales de dichos desequilibrios la ineficiencia del sector público lo cual a su vez ha incidido en un deterioro importante en la calidad de los servicios sociales prestados a la población.
- 1.3 A partir de 1990 se empezaron a tomar medidas relacionadas con la liberalización del comercio exterior, reformas en el sector financiero y acciones para mejorar la administración tributaria. Inicialmente se lograron avances, pero a partir de 1993 se produjo un deterioro de la situación económica en general, que se agudizó durante 1994.
- 1.4 El gobierno que inició su gestión en 1994 reanudó los esfuerzos por llevar adelante un programa de ajuste con el apoyo de las instituciones multilaterales de crédito, produciéndose resultados favorables. Sin embargo para que el progreso alcanzado --hasta ahora parcialmente-- se consolide, es necesario acompañar las medidas económicas con un programa extensivo de reformas en el sector público.
- 1.5 Una estrategia de reformas que resulte efectiva para la modernización del sector público requeriría por lo menos de dos aspectos principales: (i) redefinición de los papeles que deben desempeñar los sectores público y privado en la economía Hondureña; y (ii) mejoramiento sustancial en el funcionamiento y eficiencia del sector público de acuerdo a las características según las cuales éste se haya redefinido. Dentro de este contexto, en 1992 el Gobierno de Honduras por Decreto Legislativo estableció un Comité Presidencial para la Modernización del Estado (CPME), al cual se le otorgó amplios poderes legales para la coordinación general del plan de reformas.

- 1.6 El CPME determinó que una de las prioridades nacionales es la modernización y el fortalecimiento del sistema judicial, reconociéndose que su independencia y eficiencia son necesarias para un desarrollo económico y social sustentable. En concordancia con este principio, el Documento de País del BID señala la importancia de un sistema moderno de justicia que ayude a propiciar un clima adecuado para la inversión privada.
- 1.7 La posterior solicitud que el Gobierno de Honduras efectuó al BID para obtener un crédito destinado específicamente a mejorar el sector judicial, sumado al establecimiento del Comité de Alto Nivel para la Modernización de la Justicia, refleja claramente la prioridad nacional asignada a este proyecto. Los objetivos últimos de (i) consolidar el estado de derecho y (ii) promover el desarrollo económico y el bienestar social de los habitantes, constituyen, de esta manera, no sólo una prioridad gubernamental sino también una condición para que el país pueda lograr sus metas de desarrollo político, social y económico.

B. El Sistema de Justicia

- 1.8 Constitucionalmente, Honduras mantiene el modelo tradicional de Estado dividido en tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con un tribunal electoral autónomo (Tribunal Nacional de Elecciones). El Sistema de Justicia está integrado por diferentes instituciones que están relacionadas entre sí, y que pertenecen a diferentes poderes del estado. De estas instituciones, las más importantes son:
- a. El Poder Judicial. Está formado por la Corte Suprema, 10 Cortes de Apelaciones, 67 Juzgados de Letras, y 325 Juzgados de Paz de competencia mixta. Existe una serie de dependencias administrativas y técnicas que están al servicio de esta estructura básica. Cuenta con 440 jueces y 1.796 funcionarios que se desempeñan en el nivel administrativo, técnico y de apoyo judicial. Dentro de su estructura se encuentra la institución de la Defensa Pública, creada en 1989 para la defensa de las personas de menores ingresos económicos. También, tiene a su cargo los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil;
  - b. La Secretaría de Gobernación y Justicia. Se encarga del sistema penitenciario. Mediante la Subsecretaría de Justicia -creada bajo el gobierno actual-- trata las solicitudes de indultos y conmutación de penas, y vela por el funcionamiento de los establecimientos penales del país;
  - c. La Comisión Presidencial de la Modernización del Estado. Reúne a los representantes de las principales fuerzas políticas y sociales y tiene a su cargo la elaboración y evaluación de programas y proyectos específicos para cumplir con su mandato. En 1994, dicha Comisión estableció el Comité de Alto Nivel para

la Modernización de Justicia, para impulsar las acciones de reformas en el Sistema; y

- d. El Ministerio Público. Creado por Decreto Legislativo 228-93 del 13 de diciembre de 1993, es un organismo profesional especializado, independiente del poder político. Su función principal es representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, y combatir el narcotráfico y la corrupción. Tiene las facultades para promover la acción penal en casos de delitos de acción pública, o en otras circunstancias conforme lo dispongan las leyes. También tiene a su cargo la promoción de acciones legales contra funcionarios públicos y, en general, velar por la expedita y correcta administración de justicia.
- 1.9 Los recursos humanos del Sector Justicia provienen principalmente de dos instituciones, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y la Escuela de Derecho de la Universidad de San Pedro Sula (USPS). Las universidades tienen organizados Consultorios Jurídicos, en donde los estudiantes de Derecho de los últimos años prestan atención gratuita al público, bajo la supervisión de profesores.
  - 1.10 El Colegio de Abogados agrupa a los profesionales del Derecho del país. Cuenta con aproximadamente 4.422 miembros, y se requiere pertenecer al mismo para poder ejercer la profesión (colegiatura obligatoria).
- C. Áreas prioritarias para la asistencia del Banco
- 1. Legislación desactualizada
  - 1.11 El país cuenta con legislación desactualizada que impide un funcionamiento adecuado y una administración eficiente de la justicia. El ordenamiento jurídico está compuesto de códigos y leyes obsoletas que requieren una urgente modernización. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica de los Tribunales data de 1906.
  - 1.12 El gobierno está consciente de la necesidad de modernizar parte de la legislación vigente, y ya ha comenzado a trabajar en ello con la elaboración de un nuevo Código de Procedimientos Penales basado en la oralidad, el cual ha sido recientemente sometido a consideración del Congreso. Asimismo, se encuentra prácticamente concluido un nuevo Código de la Niñez que reforma, entre otras cosas, la administración de justicia para menores infractores, y un nuevo Código de Trabajo que se espera sea sometido próximamente a consideración del Congreso.
  - 1.13 La normativa jurídica en materia de jurisdicción constitucional es deficiente como mecanismo para garantizar la vigencia y supremacía de las normas constitucionales, así como para asegurar una armónica relación entre los poderes del estado. Los derechos y garantías estipulados por la Constitución Política muchas veces enfrentan

dificultades para su aplicación, dado que no existe un mecanismo suficientemente eficiente mediante el cual los ciudadanos puedan recurrir contra acciones gubernamentales que afecten sus garantías constitucionales. La Ley de Amparo, que contiene las disposiciones que regulan los recursos de amparo, exhibición personal (Hábeas Corpus), e inconstitucionalidad, es de 1936, no siendo un instrumento efectivo para proteger los derechos de los ciudadanos.

- 1.14 La reglamentación en materia de inversión y reactivación económica presenta serias limitaciones legales y administrativas. La situación para el inversionista se torna aún más compleja si se considera que el sistema de registros del país es poco confiable. Existen leyes que crean registros en diferentes instituciones y, por lo tanto, éstos se sobreponen unos a otros. Esta precariedad en la normativa y sistema registral afecta negativamente la seguridad jurídica.

## 2. Ineficiencia administrativa y de recursos humanos

- 1.15 El Poder Judicial presenta problemas de eficiencia que le impiden cumplir adecuadamente con sus funciones. Como no cuenta con verdadera ejecutoria operativa, las distintas instancias accionan más por inercia individual que motivadas por intentar cumplir con objetivos claros y previamente definidos. Las jefaturas conducen, cada una con un estilo de administración propio, las dependencias a su cargo, careciendo de una cultura gerencial institucional de conjunto.
- 1.16 Una parte importante de las funciones administrativas del Poder Judicial son realizadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) --nombramientos, permisos, traslados de personas, edificaciones, etc.--, lo cual consume gran parte del tiempo que la CSJ debería dedicar a sus funciones jurisdiccionales. Además, el ámbito operacional carece de sistemas y mecanismos eficientes. Por ejemplo, el 90% de la gestión administrativa del Poder Judicial se ejecuta en forma manual, a excepción de Contabilidad y Planillas; la ejecución del presupuesto del Poder Judicial está centralizada en el Pleno de la CSJ, lo cual causa demoras innecesarias en las adquisiciones de bienes y servicios.
- 1.17 La administración de recursos humanos carece de un sistema ágil y transparente, dificultando el desarrollo de una verdadera carrera judicial. El régimen de Carrera Judicial, por diversas razones, no ha podido ser implementado adecuadamente. Tampoco ha sido posible instrumentar un sistema objetivo para el nombramiento, promoción y remoción de jueces y demás personal judicial. Todo ello ha dado cabida a la inherencia de una diversidad de intereses que se manifiesta en una alta rotación de funcionarios y en una vulnerabilidad de la independencia del Poder Judicial.
- 1.18 Precisamente, para fortalecer la independencia del Poder Judicial una propuesta de modificación constitucional que cuenta con el respaldo de la CSJ ha sido presentada al Congreso, la cual se



espera sea aprobada durante el presente año. El BID, a solicitud de la Corte Suprema, ha aceptado financiar un encuentro entre magistrados y diputados para analizar los alcances de esta reforma y propiciar el consenso necesario para su aprobación.

### 3. Acceso inadecuado

- 1.19 El acceso a la justicia resulta sumamente difícil en las circunstancias en que se encuentra actualmente el sistema de justicia de Honduras. Proporcionalmente al territorio y población del país, el número de jueces y tribunales existentes es insuficiente. Los jueces por habitante (uno por cada 12.416 habitantes), el escaso número de tribunales (403), y la ubicación de éstos (concentrados en la zona centro-occidental del país), no guardan proporción alguna con un país cuya población es de 5.463.000 habitantes y territorio de 112.492 kilómetros cuadrados.
- 1.20 Los servicios legales para personas de menores recursos son particularmente escasos. La coordinación de los servicios de los defensores públicos para personas de escasos recursos es aún débil, y los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho son apenas un paliativo que resulta insuficiente para la magnitud del problema. La mayoría de los pobres ni siquiera pueden leer las leyes o entenderlas, o no tienen los medios para costear los servicios de profesionales que defiendan sus intereses.
- 1.21 A estos sectores de población, muchas veces les resulta hasta difícil cubrir los gastos ocasionados por papeles sellados, timbres, peritos, etc. En las encuestas realizadas por la Universidad Internacional de Florida en 1986, un 86% de las personas entrevistadas, que se encontraban privadas de su libertad, opinó que la falta de recursos económicos era la causa fundamental de que ellas no contaran con servicios de profesionales en derecho para su defensa.
- 1.22 La institucionalización de métodos alternativos para la solución de controversias tampoco se encuentra desarrollada en este país. Se necesitan mecanismos menos costosos, más rápidos y efectivos, menos formalistas (negociación, conciliación, mediación, arbitraje, etc.), y que al mismo tiempo puedan aliviar la presión de nuevos asuntos sobre el sistema de justicia formal.
- 1.23 En Honduras, uno de los elementos que preocupa a los inversionistas extranjeros es la falta de tradición y mecanismos institucionalizados de arbitraje comercial, a los cuales puedan someter fácilmente sus conflictos. El arbitraje está considerado por la legislación civil pero en la práctica el procedimiento ha sido poco utilizado. Sin embargo, en la actualidad, y ante la presión de contar con una instancia más ágil para la solución de conflictos, la Cámara de Comercio de Cortés ha puesto en funcionamiento una Corte de Arbitraje Comercial, e iguales pasos seguirá la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.

- 1.24 Honduras atraviesa en estos momentos por una transformación crucial en su sistema de justicia para menores, tanto en el plano legal como en el institucional. Recientemente, el Congreso ha aprobado un nuevo Código de la Niñez basado en la doctrina de la "protección integral". En esta nueva legislación se establecen los derechos del menor y las obligaciones del estado en proveer tanto las condiciones sociales como las instituciones adecuadas para el tratamiento del menor infractor. Sin embargo, este nuevo código requiere de un fuerte apoyo para su difusión y puesta en marcha.

#### 4. Necesidades de infraestructura

- 1.25 Estrechamente vinculada a los problemas señalados anteriormente, figura la deficiente situación de la infraestructura física que afecta sensiblemente al funcionamiento del Poder Judicial. Esta situación se manifiesta en el deterioro de las instalaciones, el acentuado hacinamiento, la falta de unidad en la distribución del espacio físico, falta de seguridad para mantener archivos, limitados espacios para pruebas de convicción, y un número importante de locales alquilados.
- 1.26 A estos problemas se agregan dos elementos muy importantes: por una parte, la necesidad de separar la gran mayoría de los juzgados de paz de los locales que ocupan actualmente en los edificios de las alcaldías municipales; por otra, la urgencia de agilizar y modernizar el sistema de justicia incorporando el procedimiento de Juicio Oral o Público.
- 1.27 La situación es particularmente difícil respecto a los Juzgados de Paz. Anteriormente, las municipalidades del país estaban obligadas a otorgar un local para el establecimiento del Juzgado de Paz de la localidad correspondiente, pero esta obligación desapareció con la nueva ley de municipalidades. De acuerdo a ésta, le corresponde ahora al Poder Judicial proveer el local para este tribunal. En relación a la infraestructura requerida para llevar a cabo juicios orales, y como resultado del nuevo código de procedimientos penales, no existen tribunales apropiados para este fin. Esto crea la necesidad de un plan para la construcción de juzgados adecuados en las diferentes regiones del país.

#### D. Programas apoyados por otros donantes

- 1.28 En 1987, USAID suscribió un Proyecto Bilateral con el Gobierno de Honduras para el Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, con una sección dirigida al Mejoramiento de la Administración de Justicia, por un monto de US\$18,33 millones. Este proyecto, que quedará concluido en 1997, ha permitido apoyar el financiamiento de diversas actividades.
- 1.29 Algunas de las principales actividades incluyen: (i) introducción de instrumentos necesarios para la aplicación de la carrera judicial; (ii) desarrollo de programas para la utilización de Defensores Públicos, Fiscales (hasta la creación del Ministerio

Público), Jueces de Paz Letrados, y Jueces Supernumerarios <sup>1/</sup>; (iii) creación y puesta en funcionamiento de la Escuela Judicial; (iv) reorganización administrativa del Poder Judicial, incluyendo la adquisición de un sistema computarizado de gestión y un sistema automatizado de consulta de jurisprudencia; y (v) puesta en funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales y Juzgados.

- 1.30 La USAID apoyó la creación de la Defensa Pública en 1989 y, hasta la fecha, el número de Defensores Público se ha duplicado (105), mientras que el costo de estas posiciones es financiado ahora por el presupuesto del Poder Judicial. Además, en 1993 el Ministerio Público pasó de ser parte del Poder Judicial a establecerse como un organismo profesional especializado con independencia funcional, administrativa y presupuestaria. El número de fiscales se incrementó de 19 a 189 entre 1992 y 1995.
- 1.31 En la actualidad, el proyecto USAID está enfocado a: (i) apoyar las reformas constitucionales para despolitizar el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema; (ii) capacitar a los profesionales del Sector Justicia en los nuevos procedimientos basados en la oralidad; (iii) ayudar a establecer mecanismos anticorrupción en el Ministerio Público; y (iv) fortalecer a las instituciones nacionales para la investigación y lucha contra los delitos ambientales, económicos y de violencia doméstica.
- 1.32 Con fondos del PNUD, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha venido prestando asesoramiento técnico a la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social para la revisión del Código de Trabajo y la preparación de una nueva versión acorde con las necesidades laborales actuales. El nuevo proyecto de Código está casi concluido.
- 1.33 Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se elaboró el nuevo Código de la Niñez. Mediante recursos de la misma institución y una cooperación técnica del BID, se definió la estructura, funciones y competencias del Instituto del Niño y la Familia (INFA), que de ser aprobada su creación por ley del Congreso, vendría a sustituir a la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS). Ambos documentos proponen una nueva orientación de la política social del Estado hacia la infancia.

#### E. Lecciones Aprendidas

- 1.34 Durante la preparación de este Programa, se trabajó muy estrechamente con USAID para lograr una complementación de los esfuerzos en el Sector y aprovechar las experiencias de la organización con mas conocimiento adquirido del sector justicia en Centroamérica y particularmente en Honduras.

---

<sup>1/</sup> Son jueces ubicados en Juzgados de Letras de lo Criminal, con gran carga de trabajo, a fin de agilizar la emisión de resoluciones judiciales, especialmente respecto de personas privadas de libertad.

- 1.35 En materia de reformas legales, la USAID se concentró en el área penal, dando origen al nuevo Código de Procedimientos Penales. Con el desarrollo de este código, se introdujo el nuevo procedimiento de juicios orales que ha recibido un amplio apoyo de todas las entidades del sistema de justicia y el Poder Legislativo. Esto se logró debido a la estrategia seguida por USAID en promover el consenso en cada etapa del proceso. El Programa del BID propone recoger esta experiencia que estuvo limitada al sector penal, y aplicarla a las demás áreas que requieren reformas legales.
- 1.36 Por otra parte, sin un adecuado marco legal, por ejemplo el que asegure la independencia del Poder Judicial, y sin apoyo institucional adecuado, no hay capacidad para absorber eficientemente los recursos externos y asegurar la sustentabilidad de un programa como el propuesto. La experiencia del USAID corrobora este fundamento ya que los esfuerzos realizados en el área de fortalecimiento institucional, introducción de nuevos sistemas, equipos y procesos no fueron precedidos por el marco legal apropiado. Consecuentemente, estas actividades en el programa de USAID no produjeron los resultados esperados en términos de asimilación y incremento de eficiencia. El programa del BID contempla la preparación de una nueva Ley Orgánica de Tribunales y las actividades de fortalecimiento institucional propuestas recogen las experiencias del USAID.

F. Estrategia del Banco en Honduras

- 1.37 El Programa propuesto corresponde a las estrategias que el Banco ha definido para Honduras en el Documento de País (CP GN1876, 13 junio de 1995). Dichas estrategias están orientadas a: (i) desarrollar el capital humano, para lo cual se promoverá una profunda reforma de los sectores educación y salud, así como de las instituciones correspondientes, y se apoyarán programas de alivio a la pobreza; (ii) aumentar la productividad de la inversión privada y estatal, para lo cual se apoyarán programas de privatización, promoción de la inversión privada, mejora de la eficiencia estatal, promoción de exportaciones y capacitación laboral; y (iii) eliminar las restricciones financieras que limitan la acción estatal, para lo cual se apoyarán programas que restauren la solvencia estatal y ayuden al gobierno en la formulación de una estrategia para el manejo de la deuda externa.
- 1.38 En el marco de estas estrategias, el Banco se ha comprometido a apoyar los esfuerzos que las autoridades locales están realizando para modernizar e incrementar la eficiencia del Sector Público y aumentar la productividad de la inversión. En este sentido, para su programa de préstamos en el período 1995-97 el Banco ha incluido proyectos que apoyan el plan de Modernización del Estado, los cuales abarcan a los tres poderes. El más importante de estos es el Programa de Reforma del Sector Público aprobado por el Directorio del BID en diciembre de 1995. Este busca modernizar al Sector Público y remover los problemas estructurales que causan desbalances fiscales recurrentes. En apoyo a dicho programa, se

destacan el proyecto sectorial de energía y el proyecto sectorial de agua y saneamiento.

- 1.39 En los sectores sociales, el Banco apoyará reformas en Salud y Educación, y en el sector financiero también se está brindando apoyo a través del préstamo Multisectorial de Crédito. Complementando estas acciones, en mayo de 1995 el Directorio del Banco aprobó una Cooperación Técnica de Reforma de la Administración Tributaria, para mejorar la capacidad de recaudación y reducir los niveles de evasión.
- 1.40 El Programa responde a las necesidades identificadas como prioritarias por las autoridades nacionales, quienes participaron activamente durante el diseño del mismo. En noviembre de 1994, se analizaron las áreas propuestas para la acción del Banco en un foro nacional auspiciado por el Banco, en el que participaron más de cien personas de las diferentes instituciones del Sector Justicia.
- 1.41 El Programa propuesto contribuye tanto a incrementar el acceso de la población a la justicia como a aumentar la eficiencia del sistema judicial en su conjunto. También ayudará a crear un clima de certeza jurídica que favorezca las inversiones y promueva el desarrollo socioeconómico del país. El funcionamiento eficiente de una economía de mercado requiere de un sólido Estado de Derecho, y de condiciones de estabilidad y previsibilidad, económica, jurídica y política necesarias para estimular el proceso de inversiones productivas de mediano y largo plazo. Por lo tanto, la Modernización del Estado debe ser integral e incluir todo el ambiente institucional y normativo que rodea la actividad económica, social y política.

## II. EL PROGRAMA

### A. Objetivo y propósitos

- 2.1 El objetivo general del Programa es mejorar la administración de justicia en Honduras, ayudando al sistema judicial a avanzar hacia la concreción del ideal de una justicia certera, eficaz y accesible. Los propósitos del programa son: (i) ayudar al país a modernizar su legislación, con objeto de dictar leyes que contribuyan a la certidumbre contractual, el respeto a las garantías fundamentales, un mejor clima para las inversiones y el fortalecimiento del estado de derecho; (ii) mejorar la eficacia de la estructura administrativa de la justicia y la capacidad técnica de su personal; y (iii) facilitar el acceso a la justicia, especialmente para quienes disponen de recursos limitados.

### B. Descripción

- 2.2 Conforme a los propósitos enunciados antes, el Programa se divide en tres componentes, a saber:

#### 1. Primer componente: Reforma legislativa

- 2.3 Este componente tiene por objeto colaborar con la modernización de las leyes del país, con objeto de crear un clima de certidumbre y claridad jurídicas, que establezcan condiciones propicias para el respeto a las garantías fundamentales, el estado de derecho y el aumento de las inversiones.

- 2.4 Los resultados de este componente serán: (i) una nueva ley de organización y atribuciones de los tribunales; (ii) una nueva ley de jurisdicción constitucional; (iii) un nuevo Código de Procedimiento Civil; (iv) legislación que brinde protección contra la violencia doméstica; (v) educación pública y capacitación del personal judicial para la aplicación del nuevo Código del Niño; y (vi) en un proyecto paralelo, que será financiado por el FOMIN, nueva legislación de arbitraje comercial.

#### a. Preparación y puesta en práctica de una nueva ley de organización y atribuciones de los tribunales

- 2.5 La ley de organización y atribuciones de los tribunales reglamenta el funcionamiento interno de la justicia. La ley vigente data de 1906 y necesita una revisión urgente, puesto que contiene numerosas disposiciones que ya no reflejan la actualidad hondureña. La revisión de esta ley permitirá a los magistrados y otros participantes en el sistema judicial adoptar una estructura orgánica, que separe la función deliberante de los jueces, de la dirección y administración de los tribunales. Si se aprobara la enmienda constitucional que actualmente debate el Congreso, la nueva ley de organización y atribuciones debería reflejar las

disposiciones constitucionales enmendadas, a saber nuevos mecanismos para la selección de los jueces y un mecanismo de carrera para éstos, que establezca procedimientos para su promoción o remoción.

- 2.6 El proyecto de ley sería preparado por un comité integrado por dos consultores locales (seis meses cada uno), con la asistencia de un consultor internacional (55 días). Este comité recibirá los aportes de funcionarios judiciales y usuarios del sistema judicial, por medio de un seminario que abrirá el proceso de preparación del proyecto, en el que participarán representantes de la justicia, el Congreso, el Ministerio Público, la Asociación de Abogados, profesores de derecho y miembros del sector privado (80 participantes en total, tres días de duración). Una vez que el comité haya completado la redacción del proyecto, se realizará otro seminario (con igual número de participantes y duración), para analizar y criticar el trabajo realizado. El proyecto definitivo incluirá recomendaciones que surjan del seminario.
- 2.7 Una vez que el Congreso apruebe la ley, el programa proveerá los fondos necesarios para su impresión y distribución a los funcionarios judiciales. Junto con la distribución se dictarán cursos informativos sobre la nueva ley para el personal judicial (8 cursos de tres días de duración, cada uno para 60 personas).

b. Preparación y aplicación de la nueva legislación sobre jurisdicción constitucional

- 2.8 El Congreso considera actualmente una reforma constitucional por la cual se crearía en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia una cuarta cámara, encargada exclusivamente de considerar casos constitucionales. Esta enmienda constitucional ha sido propuesta en el entendido de que, si los derechos consagrados por la constitución han de ser reales para los ciudadanos, debe existir un mecanismo eficaz ante el cual ellos puedan recurrir para impugnar la constitucionalidad de las acciones de los funcionarios del gobierno. Actualmente, el mecanismo para el planteamiento de casos constitucionales se considera formalista y de acceso limitado. El establecimiento de una jurisdicción constitucional, con objeto de proveer para una revisión judicial más ágil y eficaz de los casos constitucionales, es una de las metas del plan de modernización del estado.
- 2.9 Si fuera aprobada esta enmienda constitucional, el programa prestaría asistencia para la preparación de una ley complementaria para el establecimiento de la cámara de la Suprema Corte que tendrá jurisdicción exclusiva sobre los casos constitucionales. El programa financiaría el establecimiento de un comité redactor compuesto por dos consultores locales (seis meses cada uno) con asistencia de dos consultores internacionales (25 días cada uno). El proceso de preparación será similar al descrito en el párrafo 2.6, incluidos los seminarios para asegurar que se tome en cuenta las opiniones y aportes de todos los interesados. El programa

financiaría la impresión y distribución de la nueva ley, y la capacitación de quienes deban intervenir en su puesta en práctica. También financiaría el equipo para la nueva cámara constitucional y la adquisición de una biblioteca básica especializada en derecho constitucional.

c. Preparación y aplicación de un nuevo Código de Procedimiento Civil

- 2.10 El Código de Procedimiento Civil de Honduras data de 1906 y fija procedimientos que, en la década de los noventa, parecen excesivamente complicados y formalistas. Los procedimientos civiles son los que regulan el trámite judicial de los casos que no son criminales. Los procedimientos sumamente formales, estipulados en un lenguaje denso o especializado, crean una barrera para el acceso a la justicia y la aplicación efectiva de la ley, y tienden, por esta razón, a menoscabar la claridad jurídica y la certidumbre contractual. Por consiguiente, es fundamental el establecimiento de procedimientos civiles expeditos a fin de crear un clima propicio para el desarrollo económico.
- 2.11 El Programa financiará los trabajos de un comité redactor y la realización de seminarios para asegurar que el comité reciba los aportes necesarios de funcionarios judiciales y del sector privado, conforme a un proceso similar al dispuesto para todos los componentes de reformas legislativas, descritos en el párrafo 2.6. En los seminarios para la preparación de un nuevo código de Procedimiento civil participarán especialistas de países que han establecido los procedimientos orales para casos civiles, de manera que los funcionarios hondureños puedan considerar si dichos procedimientos son convenientes o deseables para el país. El programa también financiará la impresión y distribución del nuevo código, si éste es aprobado por el Congreso, y cursos de capacitación en su aplicación.

d. Preparación de legislación relativa a la violencia doméstica

- 2.12 La legislación hondureña no considera hoy día la violencia doméstica como un delito. El Código Penal estipula que constituye delito el acto de infligir heridas que incapaciten a la víctima por lo menos durante diez días. Puesto que muchas de las lesiones ocasionadas en los actos de violencia doméstica no provocan una incapacitación de tal alcance, rara vez este tipo de violencia da lugar a un encausamiento. Es posible aplicar a una persona culpable de actos de esta índole, una multa por infracción menor (equivalente a aproximadamente US\$9), pero la Fiscalía de la Mujer señala que una mujer que recurre a la justicia para obtener que se aplique una sanción de esta índole, queda expuesta a consecuencias más graves.
- 2.13 Las autoridades hondureñas han señalado que la violencia doméstica es un campo en el que reviste importancia la revisión del papel del



sistema judicial. Existen indicios de que la violencia doméstica constituye, en el país, un problema con magnitud suficiente como para imponerle controles legales más estrictos. En los nueve meses de existencia de la Fiscalía de la Mujer, muchas de las denuncias presentadas, en su mayoría por mujeres de escasos recursos económicos, han sido contra responsables de actos de violencia doméstica. Hasta la fecha, los casos de esta índole abiertos en la Fiscalía suman más de 350.

- 2.14 El programa procurará complementar los esfuerzos emprendidos por la Fiscalía de la Mujer y USAID en relación con la violencia doméstica, financiando un diagnóstico inicial del problema y presentando propuestas sobre la mejor forma de encararlo en el marco del sistema jurídico. El documento que resulte del diagnóstico se analizará en un taller de dos días de duración en el cual intervendrán jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y representantes de ONG especializadas en problemas de la mujer. El programa financiará la preparación de un proyecto de ley basado en las conclusiones del taller, cuya redacción estará a cargo de un comité compuesto por un consultor internacional, un consultor local, el Fiscal de la Mujer y un representante de la comisión del Congreso para asuntos de la mujer. Una vez preparado el proyecto de ley, será analizado en un seminario con la participación de representantes del sistema judicial, del Congreso, de la Asociación de Abogados, de universidades y de ONG. El programa también financiará la impresión y distribución de la nueva ley, así como la capacitación de funcionarios judiciales para su aplicación.

e. Aplicación del nuevo Código del Niño

- 2.15 Un estudio realizado en Tegucigalpa en 1993, indicó que solo en esa ciudad había 5.400 niños callejeros, el 37% de ellos menores de diez años, y más de la mitad menores de 14 años. El Coordinador Institucional Pro Derechos del Niño (COIPRODEN) estima que hay en Honduras 300.000 niños que trabajan y aproximadamente 4.000 alojados en 66 centros y orfelinatos. Aproximadamente 700 de los recluidos en esas instituciones han sido enviados allí por tribunales juveniles por haber infringido la ley. 2/ Ante esta situación se redactó un nuevo Código del Niño con objeto de establecer los derechos de los menores, la obligación del Estado de brindar condiciones e instituciones sociales para el cabal respeto a esos derechos y nuevos procedimientos para el tratamiento de la delincuencia juvenil.
- 2.16 El programa apoyará los esfuerzos de aplicación del nuevo Código del Niño proporcionando recursos para diseñar y poner en práctica un programa de capacitación para los funcionarios de la justicia

---

2/ CONAPRODEH, AMC, COHEP, UNICEF "Los hondureños, sus problemas y esperanzas", 1993., citado en SECPLAN, UNICEF, Análisis de la situación de la infancia, mujer y juventud, Honduras, 1995, pp. 63-64.

que tratan problemas de los menores, y financiará la impresión y distribución del nuevo Código y las nuevas leyes.

f. Legislación favorable a las inversiones y el crecimiento económico

- 2.17 Junto con este programa se presentará a consideración del Comité de Donantes del FOMIN una operación con objeto de financiar el diseño y establecimiento de leyes relativas al arbitraje y la conciliación en el ámbito comercial. Esta normativa acompañará los centros de arbitraje comercial descritos en el párrafo 2.35.

2. Segundo componente: Fortalecimiento institucional de la justicia

- 2.18 El segundo componente de este programa se financiará por medio de una cooperación técnica no reembolsable, paralela, que fue diseñada para ejecutarse simultáneamente con las actividades financiadas por el préstamo, y que operará como parte integral del programa general de modernización del sistema judicial de Honduras. La cooperación técnica es una parte esencial del programa y, por esta razón, se ofrece a continuación una breve descripción de la operación, de la cual se brinda un panorama más detallado en el Anexo I.

- 2.19 El propósito de este componente es fortalecer los sistemas de planificación, administración, control e información de la justicia, así como la capacitación y administración de los recursos humanos, en la justicia y en el Ministerio Público, con objeto de mejorar la eficiencia del poder judicial.

- 2.20 Este componente rendirá los siguientes resultados: (i) la reorganización administrativa de la justicia; (ii) la instalación de sistemas de ordenación administrativa (incluida la automatización de la información, la planificación y la administración de los recursos humanos); (iii) el perfeccionamiento de FOLIO VIEWS (una línea de servicio de jurisprudencia); (iv) la consolidación de la Escuela Judicial; y (v) la consolidación de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.

a. Evaluación y reorganización del sistema judicial

- 2.21 Muchas de las funciones administrativas del sistema judicial se hallan centralizadas en la Suprema Corte de Justicia. Con el apoyo de USAID se diseñó un sistema de planificación para la Corte, pero las estrategias y los planes trazados por el sistema no han sido integradas totalmente en los procesos de planificación o presupuesto del Poder Judicial. USAID también financió la compra e instalación de un sistema administrativo automatizado, llamado MUNIS, para generar funciones de contabilidad, planillas de pago, presupuestos, órdenes de compra, etc. MUNIS no ha sido instalado totalmente y el criterio de utilizar un sistema integrado para atender todas las necesidades de presupuesto y planilla de pagos del personal no ha sido aceptado por los funcionarios judiciales.

FOLIO VIEWS, un banco automatizado de dictámenes judiciales, no se usa totalmente porque hay mecánicas del programa que son complicadas para los usuarios y éstos no han sido preparados adecuadamente.

- 2.22 USAID y las autoridades judiciales han llegado a la conclusión de que MUNIS y FOLIO VIEWS no funcionan tan bien como podrían hacerlo, en gran medida debido a la estructura administrativa y el funcionamiento del Poder Judicial. Si éste empleara mejores mecanismos de planificación y control, aplicados en el marco de una estructura racional, habría un uso mejor de los sistemas de información existentes y de los escasos recursos financieros. Por consiguiente, con la cooperación técnica se financiará la contratación de una firma especializada en análisis, planificación y administración de organizaciones, cuyo cometido será estudiar la situación actual en detalle y formular recomendaciones con respecto a la estructura orgánica del Poder Judicial, la necesidad de crear o fusionar departamentos o de transferir al Administrador de Tribunales funciones administrativas que actualmente cumplen los ministros de la Suprema Corte, la redefinición de las descripciones de cargos, el número de funcionarios, la descentralización de funciones, la privatización de ciertos servicios y la identificación de leyes que deba modificarse para poner en práctica los cambios administrativos.

b. Establecimiento de un sistema integrado de gerencia administrativa y de recursos humanos

- 2.23 La operación de CT financiará una evaluación del sistema MUNIS con objeto de determinar si es apropiado para atender las necesidades de la Corte con su nueva estructura. Si las recomendaciones consiguientes aconsejan que continúe el uso de MUNIS, se brindará financiación para las mejoras necesarias de equipos y programas, y un amplio plan de capacitación para que el personal judicial haga uso pleno del sistema. Si la recomendación no aconseja la continuidad del uso de MUNIS, se propondrá la instalación de un nuevo sistema y la capacitación correspondiente.

c. Mejoramiento del sistema automatizado de jurisprudencia (FOLIO VIEWS)

- 2.24 La cooperación técnica financiará el mejoramiento del sistema FOLIO VIEWS para facilitar su uso y hacer de él un instrumento de trabajo eficaz para el personal judicial, además de financiar un amplio programa de capacitación de los usuarios.

d. Fortalecimiento de la Escuela Judicial

- 2.25 Con objeto de mejorar la capacidad de los funcionarios judiciales, instruirlos para que sea posible poner en práctica las reformas legales y llevar a cabo la reorganización administrativa del sector, la Escuela Judicial deberá estar en condiciones de impartir los conocimientos necesarios en esos aspectos. La cooperación

técnica fortalecerá la Escuela con esa finalidad, financiado consultorías a fin de proponer una reorganización de la Escuela y la revisión de su plan de estudios. La operación de CT también financiará equipo básico para la preparación y reproducción de documentos, una pequeña biblioteca especializada y un sistema de evaluación y seguimiento de cursos e instructores.

e. Fortalecimiento de la unidad de capacitación del Ministerio Público

- 2.26 La operación de CT financiará el fortalecimiento de la unidad de capacitación del Ministerio Público, a fin de ayudar al logro de una organización más eficaz y definir un plan de estudios basado en los perfiles ocupacionales y en las necesidades concretas del personal del Ministerio.

3. Tercer componente: Acceso a la justicia

- 2.27 El propósito de este componente es facilitar el acceso a la justicia, especialmente para quienes disponen de medios limitados, mediante: (i) el fortalecimiento de la Oficina de Defensores Públicos y de las oficinas de asistencia jurídica; (ii) el fomento de la institucionalización de la solución alternativa de controversias; (iii) el otorgamiento, al Poder Judicial, de espacio para procedimientos orales y audiencias públicas; y (iv) la construcción de locales para los juzgados de paz en las municipalidades de todo el país.
- 2.28 Como se dijo, la operación de cooperación técnica financiará una porción importante de las actividades descritas en este componente. Seguidamente se ofrece un detalle de esas actividades.
- 2.29 Este componente rendirá los siguientes resultados: (i) defensores públicos mejor preparados y trabajando en oficinas con equipo básico y materiales de biblioteca necesarios para su funcionamiento; (ii) un proyecto experimental de establecimiento de servicios de mediación en las oficinas de asistencia jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; (iii) un régimen de conciliación más sistemático aplicado, en la órbita de la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social; (iv) la puesta en vigor del nuevo Código del Niño; (v) proyectos experimentales de arbitraje comercial en la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa y Cortés (financiado por el FOMIN); (vi) la construcción de salas de audiencia para procedimientos judiciales orales y públicos; y (vii) la construcción de infraestructura a fin de que los jueces de paz cumplan sus funciones en aproximadamente 80 municipalidades de todo el país.

a. Fortalecimiento de los defensores públicos

- 2.30 La Oficina de Defensores Públicos se creó en 1989, con la asistencia de USAID, bajo los auspicios del Poder Judicial. Los defensores públicos son escogidos sobre la base de sus méritos y

tiene la responsabilidad de representar a indigentes acusados en causas penales. Los defensores públicos son nombrados por el tribunal para cada acusado que no pueda costear los honorarios de un abogado particular, y a veces también son requeridos sus servicios por las autoridades carcelarias, por familiares y amigos de los enjuiciados, en nombre de éstos. El número de defensores públicos es reducido en función de las necesidades del país, aunque en 1995 se duplicó, pasando de 55 defensores a 105.

- 2.31 La labor de los defensores públicos se ha visto trabada por la ausencia de educación continua y por la falta de espacio y equipos de oficinas adecuados. La operación de CT financiará el establecimiento de un programa de educación continua para los defensores públicos; la constitución de una biblioteca básica, suministro de equipos de oficinas y, la impresión y distribución de folletos explicativos de los servicios que ofrecen los defensores públicos y de la forma de acceder a ellos. La instrucción será impartida por la Escuela Judicial, que coordinará sus programas con la Oficina de Defensores Públicos y con la Suprema Corte de Justicia que tiene a su cargo la coordinación de la Defensa Pública.

b. Solución alternativa de controversias

- 2.32 La disponibilidad de soluciones para las controversias por vía de mediación y arbitraje, tiende posibilitar que un número mayor de personas resuelva sus litigios con mayor rapidez y elimine casos de los estrados judiciales, coadyuvando de esta forma a reducir la acumulación de causas y a mejorar la eficiencia del sistema judicial. En Honduras no hay mecanismos de mediación y conciliación ampliamente disponibles, y en cuanto al arbitraje solo es practicable en el ámbito de la Cámara de Comercio, en San Pedro Sula.
- 2.33 La operación de CT financiará un amplio programa de apoyo a un proyecto experimental, para la Universidad, dedicado a las soluciones alternativas de controversias. La operación brindará a los estudiantes de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante los últimos años de su carrera, instrucción en técnicas de conciliación y mediación para solucionar litigios de derecho civil y familiar. También apoyará la adición de servicios de mediación al asesoramiento jurídico que se ofrece en las oficinas de asistencia jurídica de la Universidad, que prestan servicios a una clientela estable de personas con bajos ingresos. Además, esta operación comprende un sistema de seguimiento de casos para determinar si las decisiones conciliadas y mediadas resultan satisfactorias para las partes interesadas, y si esas decisiones son respetadas en la práctica (el sistema desglosaría la información por sexo y situación económica de las partes), equipo de oficina básico para las oficinas de asistencia jurídica, y bibliografía básica en materia de conciliación y mediación. La Facultad de Derecho de la UNAH establecerá en su

plan de estudios un curso sobre medios alternativos de resolución de conflictos.

- 2.34 La operación de CT también apoyará el trabajo que en materia de conciliación lleva a cabo el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, con objeto de mejorar la eficacia y el alcance geográfico de los servicios que actualmente ofrece el Ministerio. Además, la CT financiará la capacitación de 50 funcionarios de la Secretaría en técnicas de conciliación laboral, instalación de un sistema de seguimiento de casos, mejoramiento del equipo de oficina y adquisición de bibliografía básica de conciliación laboral.
- 2.35 Un proyecto paralelo que se presentará al Fondo Multilateral de Inversiones, financiará el establecimiento de centros de arbitraje comercial en las Cámaras de Comercio e Industrias de Cortés y Tegucigalpa.

c. Salas para audiencias orales y procedimientos públicos

- 2.36 El proyecto de Código de Procedimiento Penal, que se encuentra a consideración del Congreso hondureño, requeriría que las audiencias orales fueran públicas en los casos penales. Los estudios realizados durante la preparación de este programa indican que el Poder Judicial no posee espacio físico para celebrar esas audiencias. Por consiguiente, el programa financiará la construcción de cuatro salas adyacentes al edificio principal del Poder Judicial, en Tegucigalpa. Esta ubicación asegura un fácil acceso para el público, y las salas serían compartidas con los jueces de los tribunales procesales y de apelaciones, y con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La construcción de estas salas resolverá solo el problema inmediato en Tegucigalpa. El Poder Judicial elaborará un plan de construcciones para responder a las necesidades en materia de procedimientos orales en otras partes del país.
- 2.37 Ya han sido preparados los diseños preliminares de las cuatro salas que se construirá en Tegucigalpa. El programa financiará la preparación de los diseños finales, la construcción y los equipos básicos de cada una.

d. Construcción de recintos para los juzgados de paz

- 2.38 En Honduras hay 325 juzgados de paz y, para la mayoría de los hondureños, estos constituyen su único contacto con el Poder Judicial. Los juzgados de paz actúan como tribunales de primera instancia para cuestiones civiles y penales, tratando la mayoría de los litigios cotidianos de las comunidades donde prestan servicio. Los casos que no pueden resolver por medio de la conciliación o la sentencia, se remiten a los tribunales de instrucción. Los juzgados de paz han trabajado, durante muchos años, en difíciles condiciones materiales: carecen de espacio adecuado para oficinas o audiencias, y sus titulares deben viajar largas distancias, puesto que algunas de las comunidades de su jurisdicción carecen de

lugar para que el juez viva o, aun, disponga de una habitación para pernoctar. Esto hace difícil para el Poder Judicial, atraer candidatos calificados para la titularidad de esos juzgados. Esta situación se ha tornado crítica con la promulgación de la nueva Ley de Municipalidades que eliminó la obligación, impuesta hace mucho tiempo a las municipalidades, de proporcionar espacio para oficinas y audiencias al juez de paz asignado a cada localidad. Muchas municipalidades no suministran ahora ese espacio, apremiadas por la obligación de ofrecerlo a otros servicios municipales. En muchos casos el Poder Judicial alquila recintos a las municipalidades, en general inadecuado para las necesidades de los jueces y la solución eficaz de los casos. El Poder Judicial inició un plan de construcciones para atender esas necesidades y a la fecha ha construido sedes para los juzgados de paz de Amapala, Sabanagrande, Buenaventura y Arenal.

- 2.39 El programa financiará la construcción de edificios para los juzgados de paz en por lo menos 80 municipalidades de todo el país. Hay dos modelos de edificios que responden a la población y las necesidades proyectadas de cada municipalidad. En las que tienen una población de menos de 10.000 habitantes, se construirá el modelo B, con una superficie edificada de aproximadamente 140 m<sup>2</sup>. En las municipalidades con población de más de 10.000 personas se construirá el modelo A, con una superficie edificada de 220 m<sup>2</sup>. El número total de construcciones, basado en los diseños y costos preliminares, es aproximadamente 80 pero la cifra exacta se determinará durante la ejecución del programa y dependerá de los costos de diseño finales. El primer año se construirán por lo menos 20, en lugares que determinará la Suprema Corte. Las municipalidades serán escogidas conforme al tamaño de la población que habrá de servir el juzgado, el número de casos tratados y la disponibilidad de terrenos apropiados. Éstos ya se hallan en posesión del Poder Judicial o serán donados por las municipalidades.
- 2.40 Los diseños preliminares de los dos modelos de edificios de juzgados de paz (descritos en 2.39) ya han sido preparados. Los diseños son modestos e incluyen espacios apropiados para audiencias públicas, oficinas para el juez de paz y su personal, una oficina pequeña para el defensor público y el fiscal, y un pequeño espacio para residencia del juez. (Algunos jueces cubren un circuito, vale decir que no están en forma permanente en la comunidad a la que prestan servicio, sino que trabajan en varias municipalidades y, por ende, deben pasar varias noches en cada municipalidad. Los jueces instalados en las municipalidades rurales optan a menudo por residir en las ciudades principales más cercanas y viajar diariamente a la municipalidad, debido a que en ésta es imposible obtener una vivienda decente).

C. Dimensión del programa

- 2.41 A determinar la dimensión del programa revistió importancia considerar, conjuntamente, la necesidad de asistencia técnica para

la preparación de la legislación, capacitación, consolidación institucional y servicios jurídicos, con las necesidades esenciales del Poder Judicial en materia de infraestructura. La fijación de prioridades entre esas consideraciones, llevó al diseño de un programa que comprende un préstamo, una cooperación técnica no reembolsable y la propuesta de una donación del FOMIN. El cuadro siguiente detalla los costos de cada componente y su correspondiente fuente de financiación.

<b>COSTO DEL PROGRAMA POR COMPONENTE</b>			
<b>Costos Componentes (Expresado en miles de US\$)</b>	<b>BID/FOE 5,187</b>	<b>Coop.Téc. 1,500</b>	<b>Total Gen. 6,688</b>
<b>Modernización del Derecho</b>	1,006	0	1,006
Reformas Legales	216	0	216
Capacitación	596	0	596
Difusión y Publicaciones	194	0	194
<b>Acceso a la Justicia</b>	4,181	455	4,636
Fort. de la Defensa Pública	0	169	169
Proy. Pilotos Solución Conflictos	0	286	286
Obras y Equipos	4,181	0	4,181
Const. Juzgados de Paz	3,800	0	3,800
Const. Salas Audiencia	240	0	240
Mobiliario y Equipo	141	0	141
<b>Fortalecimiento Poder Judicial</b>	0	1,045	1,045
Reorganización Judicial	0	220	220
Sistema Gestión Administrativas	0	191	191
Fort. Escuela Judicial	0	331	331
Fort. Ministerio Público	0	302	302

- 2.42 El primer componente, de reformas legales, se financiará por medio del préstamo propuesto. El segundo componente, de acceso a la justicia, comprende actividades de cooperación técnica e infraestructura y, por consiguiente, la infraestructura se financiará mediante el préstamo propuesto y las otras actividades con los recursos de la CT propuesta. El tercer componente, de fortalecimiento del Poder Judicial, comprende actividades que se encuentran claramente dentro del ámbito de la asistencia técnica y, por ende, se financiará totalmente por la operación de cooperación técnica paralela propuesta.
- 2.43 La dimensión de los componentes refleja el costo de atención a las necesidades más apremiantes de cada uno de los aspectos descritos, atinentes a la reforma de la legislación, el fortalecimiento institucional y el acceso a la justicia. Con respecto al dimensionamiento del subcomponente de infraestructura, la financiación propuesta sufragará el costo de, por lo menos, un tercio de las construcciones más necesarias. Esto supone un número considerable de edificaciones para que el Poder Judicial comience a resolver sus necesidades de infraestructura y permitirá que el personal de la Suprema Corte de Justicia que intervenga en la



ejecución del proyecto, adquiriera idoneidad en materias de ejecución y adquisiciones, lo que facilitará la segunda etapa de construcciones en el futuro.

D. Costo y financiamiento del Programa

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO									
CATEGORIAS	BIB/FOF	Ayuda	Total	%	C.T	Total	%	Total	%
I	INGENIERIA Y ADMINISTRACION	1 514	48	1 562	19.5	0	1 562	16.44	
	1.1 Unidad Ejecutora	909	29	938	11.7	0	938	9.87	
	1.2 Seguimiento y Eval. Exp. del Prog.	126	4	130	1.6	0	130	1.37	
	1.3 Estudios y Diseños	283	9	292	3.6	0	292	3.07	
	1.4 Supervisión Obras Intra	196	6	202	2.5	0	202	2.13	
II	COSTOS DIRECTOS	5 027	161	5 187	64.8	1 500	6 687	70.39	
	2.1 Obras y Equipos	4 051	130	4 181	52.3		4 181	44.01	
	2.1.1 Construcción Juzgados de Paz	3 682	118	3 800	47.5		3 800	40.00	
	2.1.2 Construcción Salas de Audiencia	233	7	240	3.0	0	240	2.53	
	2.1.3 Mobiliario y Equipo	137	4	141	1.8	0	141	1.48	
	2.2 Modernización del Derecho	975	31	1 006	12.6	0	1 006	10.59	
	2.3 Acceso a la Justicia	0	0	0			455	4.79	
	2.4 Fortalec. del Poder Judicial	0	0	0		1 045	1 045	11.00	
III	COSTOS RECURRENTES	0	548	548	6.9	0	548	5.77	
	Sub Total	6 540	758	7 298	91.2	1 500	8 798	92.61	
IV	SIN ASIGNACION ESPECIFICA	419	0	419	5.2		419	4.41	
	4.1 Escalamientos	368	0	368	4.6		368	3.87	
	4.2 Imprevistos	517	0	51	0.6		51	0.54	
V	COSTOS FINANCIEROS	241	42	283	3.5	0	283	2.98	
	5.1 Intereses	169	0	169	2.1		169	1.78	
	5.2 Comisión de Crédito	0	42	42	0.5		42	0.44	
	5.3 Inspección y Vigilancia	72	0	72	0.9		72	0.76	
TOTAL									100

2.44 Se estima que el costo total del programa asciende al equivalente a US\$9,5 millones. El Banco prestará el equivalente a US\$7,2 millones con cargo a los ingresos netos del FOF y proveerá el equivalente a US\$1,5 millón por concepto de cooperación técnica no reembolsable para financiar los servicios de consultoría previstos en el plan de operaciones que se adjunta como Anexo 1. Los plazos y condiciones del préstamo aparecen en el resumen inicial de la propuesta. Los plazos y condiciones de financiación de la operación de cooperación técnica figuran en el plan de operaciones antes mencionado. El equivalente a US\$800.000, en financiación de contrapartida local, será suministrado por Honduras, con cargo al presupuesto del Poder Judicial. El cuadro precedente muestra la asignación de los costos por categoría y fuente de financiamiento. En el Anexo II-1 se ofrece un presupuesto pormenorizado del programa.

### III. MARCO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DEL PROGRAMA

#### A. Prestatario y Ejecutor

- 3.1 El Prestatario será la República de Honduras. La Corte Suprema de Justicia será el Organismo Ejecutor del Programa, la cual actuará por medio de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP). El Gobierno asumiría la responsabilidad del servicio de deuda vinculado con el préstamo, y firmaría con el ejecutor convenios de transferencia de fondos, cuya presentación al Banco sería una condición previa al primer desembolso. Se recomienda que el Prestatario demuestre, como condición previa al primer desembolso, su compromiso de aportar los recursos de contrapartida necesarios para la ejecución del Proyecto.

#### B. El Poder Judicial de Honduras

##### 1. Marco Legal

- 3.2 El marco principal del Poder Judicial está dado por la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. La estructura central está determinada por: (i) Una Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados propietarios y siete suplentes, dividida en tres Salas (Civil, Penal y Laboral) integradas cada una de ellas por tres magistrados. Tiene la potestad para nombrar a todos los jueces del país y demás funcionarios del Poder Judicial, así como para organizar y dirigir la administración de justicia; (ii) Diez Cortes de Apelaciones; (iii) Sesenta y siete Juzgados de Letras distribuidos en ocho secciones judiciales; y (iv) Trescientos veinticinco Juzgados de Paz de competencia mixta.

- 3.3 Esta estructura básica recibe un apoyo administrativo de las dependencias administrativas y técnicas de la Corte Suprema. Estas incluyen la Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento; la Dirección Administrativa; la Dirección de Administración de Personal; el Consejo de la Carrera Judicial; la Comisión de Reforma Judicial; la Auditoría; la Pagaduría; la Escuela Judicial; los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil; la Inspectoría General de Tribunales y la Defensa Pública.

##### 2. Aspectos Administrativos

- 3.4 Gran parte de las funciones administrativas del Poder Judicial han sido realizadas por la Corte Suprema en Pleno (nombramientos, permisos, traslados de personal, edificaciones, etc.). Sin embargo en enero de 1995 se nombró un Administrador de la Corte mediante un concurso supervisado por la USAID. Este administrador tiene a su cargo los aspectos generales relacionados con las responsabilidades de administración de la Corte Suprema y, consecuentemente, ha ido

absorbiendo muchas tareas administrativas previamente realizadas en forma directa por los Magistrados de la Corte.

- 3.5 Bajo el componente de Fortalecimiento Institucional del Programa que será financiado con los recursos de la Cooperación Técnica, se tiene previsto apoyar los esfuerzos ya comenzados por USAID para superar las deficiencias existentes en la gestión administrativa del Poder Judicial. Mediante el financiamiento de estas actividades se asegurará un sistema de planificación y presupuesto más eficiente, recursos humanos mejor capacitados y sistemas computarizados que agilicen los procesos.
- 3.6 La Oficina de Administración e Ingeniería de la CSJ, dirigida por el Administrador de la Corte, cuenta con el apoyo de profesionales en ingeniería y administración. Durante la preparación del Programa, esta oficina trabajó estrechamente con el Banco y los consultores contratados para su diseño. En base al conocimiento adquirido en esta experiencia, esta oficina apoyará a la UEP en todas las actividades de infraestructura, preparación de reformas legales y fortalecimiento institucional.

### 3. Aspectos Financieros

- 3.7 El Poder Judicial pertenece al Sector Público del país y, como tal, está regido por las leyes, normas y procedimientos establecidos para la Administración Pública.
- 3.8 La Contraloría General de la República ejerce el control previo y posterior de la ejecución presupuestaria del Poder Judicial. El presupuesto anual lo elabora la Dirección de Presupuesto de dicho poder, en base a 18 subprogramas que cubren las distintas actividades que el mismo desarrolla. Posteriormente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprueba el proyecto de presupuesto y lo somete a consideración de la Secretaría de Hacienda para su ejecución.
- 3.9 El presupuesto asignado al Poder Judicial durante los últimos cinco años (1990-1994) fue ejecutado en su totalidad, de acuerdo al siguiente detalle (en millones de dólares de diciembre 31 de 1994):

AÑO	ASIGNADO Y EJECUTADO	VARIACION (+ MAS/MENOS)
1990	2,6	3,4
1991	2,7	3,8
1992	3,2	18,5
1993	3,7	15,6
1994	5,8	56,7

- 3.10 La asignación presupuestaria para 1995 es de US\$9,9 millones, representando un incremento del 70,7% en relación a 1994. De acuerdo a información preliminar se estima que la Corte Suprema ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado en dicho año.
- 3.11 A partir de 1995, los recursos asignados al Poder Judicial empezaron a ser determinados en base a un porcentaje del presupuesto general de la Nación (excluyendo los fondos provenientes de fuentes de financiamiento externo). De acuerdo con lo anterior, durante 1995 se asignó al Poder Judicial un 2,1% de dicho presupuesto; durante 1996 se le asignará un 2,5%, y a partir de 1997 el porcentaje sería del 3,0%. Este último es el porcentaje que, por mandato de la Constitución de la República, se le debe asignar al Poder Judicial anualmente.
- 3.12 El análisis de las proyecciones de los ingresos y gastos del Poder Judicial, indican que éste estaría en condiciones de atender normalmente los costos recurrentes que se derivan de la ejecución del programa, aproximadamente US\$189.000 anuales, a partir del tercer año de ejecución.
- 3.13 El Poder Judicial cuenta con un departamento de auditoría interna, que depende directamente de la Contraloría General de la República. Dicho departamento apoyaría a la unidad ejecutora en las labores de control y seguimiento del programa y en el establecimiento de los procedimientos administrativo-financieros que se crearían para la ejecución del mismo.

C. Ejecución y Marco Institucional

1. Corte Suprema de Justicia

- 3.14 La Corte Suprema de Justicia será el Organismo ejecutor del Programa. Actuará por medio de Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que tendrá la capacidad gerencial, técnica y financiera necesarias para ejecutar apropiada y oportunamente cada una de las actividades descritas en el Programa, tanto el préstamo propuesto como la Cooperación Técnica paralela.
- 3.15 Para facilitar la ejecución de los componentes financiados por la Cooperación Técnica, la Corte suscribirá acuerdos con las instituciones participantes y responsables de su ejecución: (Ministerio Público, Defensa Pública, UNAH, Secretaría de Trabajo y JNBS). Estos documentos describirán, entre otros aspectos, los términos que regirán la operatividad del Programa así como también las obligaciones y responsabilidades de las partes. Anexo a los acuerdos se presentarán los cronogramas de ejecución, metas y el presupuesto. Estos acuerdos serán negociados con las entidades beneficiarias y revisados por el Equipo de Proyecto del Banco. Su suscripción constituirá una condición previa al primer desembolso.

## 2. Comisión de Alto Nivel para la Modernización de Justicia

- 3.16 La Comisión de Alto Nivel será el órgano asesor de la UEP en los aspectos técnicos del Programa. La Comisión estará integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la presidirá, el Ministro de Gobernación y Justicia, el Fiscal General y el Ministro del Despacho Presidencial (Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Modernización del Estado). La Comisión no tendrá ninguna responsabilidad sobre los aspectos administrativo financieros del programa.

## 3. Unidad Ejecutora

- 3.17 La UEP estará encabezada por un Director Ejecutivo que asumirá completa responsabilidad por la ejecución y control del programa, y dependerá del Presidente de la Corte Suprema. El Director de la UEP contará con dos unidades de apoyo: (i) la unidad técnica que estará a cargo de la supervisión y la asesoría técnica; y (ii) la unidad administrativa-financiera que tendrá la responsabilidad de administrar los recursos del programa y de la contrapartida nacional, más todos los aspectos administrativos y logísticos. Adicionalmente, en cada entidad participante existirá una persona que se responsabilizará de la ejecución de los componentes y la coordinación con la UEP.
- 3.18 Asimismo, el Director de la UEP contará con el apoyo de los consultores financiados por el Programa para asistir en la ejecución, seguimiento y evaluación del mismo. En total se estima que la UEP contará con aproximadamente 10 empleados. El Anexo III-1 presenta un detalle de la estructura orgánica de la UEP y un detalle de costos. Como parte de la preparación de este Programa se realizó un detalle de las responsabilidades que tendría la UEP y los perfiles y calificaciones del personal requerido.
- 3.19 Antes del primer desembolso la Corte Suprema deberá constituir la UEP y contratar el personal con el asesoramiento de la Comisión de Alto Nivel.

## D. Modalidad de Ejecución

- 3.20 Las acciones requeridas para llevar a cabo la modernización del Sector Justicia son de diversa naturaleza (legislativas, institucionales, presupuestarias, etc.) y altamente dinámicas. Esto hace que el esquema tradicional de establecer metas rígidas y definidas "a priori" deba ser reemplazado por un sistema que permita efectuar cambios con suficiente agilidad. Por lo tanto, el programa tendrá un procedimiento de ejecución flexible mediante el cual la UEP y el Banco acordarán anualmente un Plan Anual de Trabajo (PAT), para ser ejecutado el año siguiente, y basado en la experiencia recogida por la UEP, las acciones de seguimiento, y las evaluaciones periódicas.

- 3.21 Conjuntamente con las autoridades del Gobierno, se elaboró un Plan de Trabajo detallado para el primer año de ejecución del Programa, que incluye las actividades a ejecutarse durante ese período (Ver Anexo III-2). Las actividades, metas y presupuesto para los tres años siguientes también han sido definidas pero cuentan con mecanismos que permitan efectuar cambios (por ejemplo, los gastos de divulgación y capacitación de nuevas leyes, no se realizarán sino hasta que estas sean aprobadas; no se invertirán recursos en el fortalecimiento administrativo del Poder Judicial sino hasta que la propuesta de reorganización administrativa sea aprobada). Por consiguiente, los cronogramas y presupuestos para estos últimos años, deben considerarse como provisionales.
- 3.22 Los PAT, serán elaborados con la participación activa de los representantes de cada una de las instituciones participantes en el Programa. Las metas y actividades a desarrollarse no solo deberán ser consistentes con los objetivos globales del Programa sino que además incorporarán las experiencias obtenidas. Se prestará atención al orden de las actividades propuestas, los resultados esperados, los indicadores de éxito, el presupuesto asignado, el cronograma establecido y los términos de referencia para la contratación de servicios.
- 3.23 Con anterioridad a la conclusión del primer año de actividades (un mes), la UEP deberá enviar al Banco un informe que incluya el grado de cumplimiento de las metas previstas para el primer año de trabajo, así como un PAT detallado para el próximo año. (procedimiento que se repetirá en los años siguientes). Cada PAT deberá tener como anexo la programación financiera del mismo, la que deberá hacerse por componente y actividad, en atención a los cuadros de cuentas aprobados previamente por el Banco. La aprobación del PAT por el Banco será condición previa a los desembolsos para el año siguiente.

E. Coordinación y Supervisión

- 3.24 La UEP será el ente encargado de mantener una coordinación permanente con las instituciones del Sistema de Justicia, beneficiarias de las actividades del Programa. Asimismo, deberá establecer un calendario de reuniones periódicas con otros organismos internacionales que financien actividades dentro del sector, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y recursos.
- 3.25 La supervisión del programa la llevará a cabo la Representación del Banco en Honduras, con el apoyo del Equipo del Proyecto. Se contempla un monitoreo continuo que comenzará desde el inicio de la ejecución del Programa. Estas actividades serán apoyadas por consultorías que están previstas en el Programa.

F. Cronograma de Ejecución

- 3.26 El período de ejecución del Proyecto se estima en cuatro años. Durante la preparación del programa se diseñó un cronograma

tentativo de las actividades del Proyecto que servirá de base para la definición de los Planes Anuales de Trabajo

G. Cronograma de Desembolsos

- 3.27 El cronograma tentativo de desembolsos figura en el cuadro siguiente:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLEOS (en miles de US\$)					
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL
BID	1,975	2,782	1,901	542	7.200
LOCAL	112	238	247	203	800
TOTAL	2.087	3.020	2.148	745	8.000
Porc.	26%	38%	27%	9%	100%

H. Adquisición de Obras, Bienes y Servicios

- 3.28 La UEP será responsable de realizar los llamados a licitación para la adquisición de bienes y obras y de la selección de servicios de consultoría para el Programa. Además será responsable de la preparación de los términos de referencia y otras especificaciones técnicas. También se encargará de coordinar los procesos de adjudicación y contrataciones finales. En cada etapa se seguirán los procedimientos del Banco para tales efectos, los cuales forman parte del contrato de préstamo.

1. Obras civiles

- 3.29 Para la construcción de los Juzgados de Paz y Salas de Audiencia para juicios orales, se recomienda la contratación de paquetes de obras, a fin de asegurar la competencia e interés de contratistas locales. Las adquisiciones de bienes y las construcciones de obras se llevarán a cabo conforme a los procedimientos estipulados en el Anexo B del Contrato de Préstamo. La licitación pública internacional (LPI) será obligatoria para obras de construcción cuyo valor exceda a US\$1 millón. Cuando los paquetes de construcción tengan un costo entre US\$250.000 y US\$1 millón, se deberá realizar licitación pública nacional (LPN). Las obras cuyo costo sea inferior a US\$250.000 se realizarán por medio de licitaciones privadas, debiéndose invitar a por lo menos tres contratistas. La contratación directa en zonas rurales remotas se aplicará para obras inferiores a US\$100.000. Dada la naturaleza de las obras, no se requerirá precalificación o registro de proponentes en las licitaciones para la ejecución de ellas.

## 2. Equipos y materiales

- 3.30 La licitación pública internacional será obligatoria para adquisiciones de bienes cuyo valor exceda US\$250.000. Para la compra de bienes con valor entre US\$150.000 y US\$250.000 se utilizarán procedimientos de LPN. La adquisición de bienes por un costo de hasta US\$150.000 se realizará mediante procedimientos de licitaciones privadas, con invitaciones a por lo menos tres proveedores. Los procedimientos de licitaciones privadas y LPN estarán abiertos a proveedores internacionales.

## 3. Servicios de Consultoría

- 3.31 La contratación de servicios de consultoría se llevará a cabo conforme al Anexo C del Contrato de Préstamo. Se emplearán métodos de Concurso Público Internacional (CPI) para aquellos contratos cuyo valor exceda US\$200.000. Los contratos cuyo valor sea entre US\$100.000 y US\$200.000 se realizarán de acuerdo al método de Concurso Público Nacional (CPN). Los servicios de consultoría por valores inferiores a US\$100.000 podrán contratarse mediante concursos privados, con un mínimo de invitaciones a tres firmas consultoras. Los concursos privados o invitaciones directas, y los procedimientos CPN estarán abiertos a firmas consultoras internacionales.

## 4. Revisión previa por el Banco

- 3.32 La Representación del Banco examinará los primeros cinco contratos por obras civiles, independiente de su monto, y toda la documentación de apoyo de los contratos por obras civiles y bienes por un monto equivalente o superior a US\$250 mil. Todos los contratos restantes estarán sujetos a revisión ex-post por el personal de la Representación, obteniendo una muestra aleatoria.

### I. Anticipo de Fondos y Reconocimiento de Gastos

- 3.33 Se recomienda reconocer gastos previos a la aprobación del préstamo, de conformidad con las disposiciones del Banco, hasta por un monto máximo de \$300.000 para cubrir gastos efectuados, con posterioridad al 30 de septiembre de 1995, por la CSJ para avanzar con (i) los diseños y estudios finales de las construcciones a financiarse, (ii) la preparación de los documentos de licitaciones y (iii) el establecimiento de la UEP. Asimismo, dada la naturaleza del Programa y el ritmo esperado del avance del mismo, es recomendable la constitución de anticipo de fondos equivalentes al 10% del préstamo, destinado a cubrir un programa de gastos de 120 días.

### J. Auditoría Externa

- 3.34 Los estados financieros del Programa serán examinados anualmente por una firma de auditores externos aceptable al Banco y de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para tal fin. Dichos



estados deberán ser presentados durante el período de ejecución y dentro de los 120 días siguientes al cierre del año en que se haya iniciado la ejecución.

K. Evaluaciones

- 3.35 La UEP presentará a la Comisión de Alto Nivel y al Banco, durante la ejecución del Programa, informes semestrales de progreso, con un detalle apropiado de la ejecución de los componentes, los alcances logrados, los procedimientos aplicados en la utilización de los recursos del financiamiento, las acciones correctivas que se impusieron y el avance de las actividades.
- 3.36 En paralelo, el Programa tendrá un programa de evaluaciones externas anuales. Durante el primer año de ejecución del Programa, la UEP contratará a un consultor para diseñar indicadores de éxito y criterios de evaluación y de impacto para cada componente del Programa, así como un sistema adecuado de seguimiento y evaluación. El Marco Lógico preparado durante el desarrollo de este Programa, servirá de base para este ejercicio (ver Anexo III-3).
- 3.37 Las evaluaciones deberán ser ejecutadas por expertos de diferentes disciplinas, cuyos perfiles deberán estar en concordancia con los trabajos a implementar en el Programa. Cada componente del Programa ha previsto fondos para estas evaluaciones anuales. Las evaluaciones de los diferentes componentes se deberán realizar al mismo tiempo y por lo tanto requiere un trabajo en equipo por parte de los diferentes evaluadores. La evaluación final deberá ser total e interdisciplinaria. Esto facilitará no sólo las modificaciones por componente, sino que también la readecuación total del Programa para el logro de los objetivos previstos. Igualmente asegurará que el Programa mantenga su unidad y complementariedad entre componentes.

#### IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

- 4.1 El Programa es simple e integral, con objetivos y productos definidos y factibles de ser cumplidos en el período de ejecución previsto. Los componentes se sustentan en un diagnóstico y estudios técnicos adecuados, recogiendo las experiencias de otras organizaciones que desarrollaron proyectos en el sector; se ajustan a las capacidades técnicas de las instituciones involucradas en el programa para responder a los objetivos trazados; y contempla el apoyo técnico y financiero para garantizar su ejecución. Los componentes de este Programa reflejan actividades que continuarán los trabajos y/o reformas ya comenzadas con recursos de otros donantes, que a la fecha han mostrado resultados y logros positivos.

##### A. Viabilidad del Programa

###### 1. Viabilidad Institucional

- 4.2 Para la administración del Programa, la Corte Suprema de Justicia contará con una Unidad Ejecutora que se encargará de atender el manejo de los aspectos técnicos, administrativos y financieros. Los gastos para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora serán financiados con recursos del préstamo. Además, ésta será apoyada por consultorías especializadas y asistida por la Comisión de Alto Nivel para la Modernización de Justicia, donde se encuentran representadas las partes principales del sector justicia.
- 4.3 Durante el análisis se examinaron y definieron las responsabilidades operativas y técnicas de cada uno de los niveles de ejecución del proyecto, la organización y dependencia de la Unidad Ejecutora, y el proceso general de administración financiera de los recursos del Programa. Adicionalmente, la capacidad de la Corte Suprema para la ejecución del mismo se encuentra reforzada por la experiencia que ésta adquirió en la preparación y ejecución de proyectos que han sido financiados por la AID.

###### 2. Viabilidad Financiera

- 4.4 La viabilidad financiera del programa se determinó midiendo la capacidad del ejecutor para proporcionar los recursos de contrapartida y absorber el impacto presupuestario de los gastos recurrentes incrementales originados por el Programa.
- 4.5 Los recursos de contrapartida local ascienden, en promedio, a US\$200.000 por año. Estos se incluirán anualmente en el presupuesto del Poder Judicial, y en el contrato de préstamo se establecerán las condiciones que aseguren la disponibilidad oportuna de dichos fondos. Teniendo en cuenta la alta prioridad que el Gobierno de Honduras le ha otorgado a este Programa, y que los aportes de contrapartida representan un porcentaje muy modesto

dentro del presupuesto general del Poder Judicial (alrededor del 2% anual), se prevé que se podrá disponer de dichos fondos en el momento requerido por el desarrollo del proyecto.

- 4.6 El cálculo de los costos recurrentes adicionales se basa en los costos de mantenimiento de las obras a construirse con recursos del Programa (Juzgados de Paz y Salas de Audiencia) y del equipamiento respectivo. Dichos costos se originarán a partir de 1997, segundo año de ejecución, por un monto anual de US\$189.000, lo que significa un 1,9% del total del presupuesto del Poder Judicial proyectado para ese año.
- 4.7 El presupuesto del Poder Judicial para 1995 ascendió a US\$9,9 millones. Si se tiene en cuenta que a partir de 1997 se le estaría asignando al Poder Judicial un 3,0% del presupuesto general de la Nación, y considerando las proyecciones de crecimiento del PIB de 3,9% para los años 1995-1996, se confía en que el Poder Judicial podrá absorber fácilmente los costos incrementales del proyecto.

### 3. Viabilidad Política

- 4.8 El Programa es parte de los esfuerzos conjuntos que han realizado los distintos sectores sociales del país para modernizar la administración de justicia y, con distintos grados de intensidad, abarca por lo menos a las tres últimas administraciones. Estos esfuerzos fueron reconocidos por la CPME al determinar como una de las prioridades nacionales la modernización del sistema de justicia y al promoverse la creación del Comité de Alto Nivel para la Modernización de la Justicia en 1994. Estos esfuerzos incluyeron una coordinación interinstitucional y un consenso que comenzó a desarrollarse en 1985 cuando se apoyó la creación de la Comisión Nacional de Reforma Jurídica y la Escuela Judicial. Este consenso se intensificó con el Foro Nacional "Estrategia para el Mejoramiento de la Administración de Justicia en Honduras", auspiciado por el Banco en 1994.
- 4.9 Los componentes del programa reflejan las conclusiones y estrategias planteadas en el Foro Nacional mencionado. Durante la elaboración del proyecto se mantuvo una relación muy estrecha con la Comisión de Alto Nivel para la Modernización de Justicia, con el fin de garantizar un proceso transparente y un programa con amplio apoyo gubernamental. Asimismo, el proyecto incluye actividades que ayudarán a promover el consenso y la cooperación política en la preparación y aprobación de nuevas reformas legales. Por lo tanto, uno de los aspectos del Programa será conservar e intensificar el consenso político alcanzado respecto a la necesidad y direccionalidad de la modernización del sector.

B. Sostenibilidad

- 4.10 La sostenibilidad del presente Programa debe comprenderse en la institucionalización de las reformas que se están implementando dentro del marco del mismo. El presente Programa representa una etapa más del proceso de modernización del sistema judicial emprendido por el país en 1987. El Programa complementa y consolida las reformas apoyadas por otros donantes y, éste representa la continuación de un proceso de largo plazo. Se distingue de las etapas anteriores de reforma por las actividades y financiamiento de acciones que facilitan el acceso a la justicia, por el énfasis en el fortalecimiento de las instituciones del Sistema de Justicia, en el mejoramiento de la capacidad de planeamiento y de gestión de las mismas y por la difusión y capacitación en las nuevas leyes. Se espera que, con estos elementos de fortalecimiento, se asegure la institucionalización de las reformas iniciadas. Por otra parte, tanto el Gobierno ha expresado su voluntad de asignar los recursos necesarios al presupuesto del poder judicial, para la continuación de los proyectos iniciados o ampliados dentro del marco del Programa. Situación que se ha ratificado al aumentarle el presupuesto, para 1996, al 2.5% del presupuesto general de la nación.

C. Dimensionamiento de la inversión en Infraestructura

- 4.11 En algunas municipalidades del país, el grave estado de deterioro de los juzgados de paz que operan en sus dependencias, junto a la falta de instalaciones de agua y servicios sanitarios, presenta una situación que, sin lugar a duda, requiere de una solución inmediata. Además, la mayoría de estos juzgados no cuentan con las facilidades físicas, principalmente salas de audiencia, para llevar a cabo los juicios orales, contemplados en el nuevo código de procedimientos penales. Apoyar al sector con la infraestructura adecuada es, por lo tanto, un paso importante hacia el objetivo de incrementar la credibilidad del sistema, darle transparencia a los procesos, y dignidad a los responsables de impartir justicia.
- 4.12 El dimensionamiento de la inversión en construcción se basó en (i) los estudios arquitectónicos sobre el espacio requerido para la funcionalidad de los juzgados, y (ii) un análisis del costo promedio de construcción por m<sup>2</sup>. Este último análisis prevé la construcción de dos tipos de salas de juzgados, conforme a la demanda de servicios y la densidad poblacional para el área de acción. Esto resulta en juzgados de 140 m<sup>2</sup> y 220 m<sup>2</sup>, a un costo promedio de US\$200 por m<sup>2</sup>. Por otra parte, se estimó la cantidad de juzgados que era conveniente construir en una primera etapa, considerando las facilidades dadas por las municipalidades y la disponibilidad de terrenos.
- 4.13 Para la determinación de la construcción de juzgados de paz se efectuó un análisis respecto a la alternativa de arrendar, ya sea a las mismas municipalidades donde actualmente están operando o a otros establecimientos que proporcionan una funcionalidad similar a

la prevista para los juzgados 3/, sobre todo teniendo en cuenta la donación de terrenos que las municipalidades efectuarían para dichas construcciones. También se consideraron los ahorros provenientes de otros costos propios de la opción de arrendar, como ser traslado, mobiliario y las adaptaciones que deberán hacerse en los establecimientos arrendados.

D. Medio Ambiente

- 4.14 El Comité de Medio Ambiente clasificó esta operación en la categoría II debido a que no se prevén impactos ambientales. No obstante, los diseños finales de ingeniería y arquitectura contemplan un análisis ambiental que tomará en cuenta medidas ambientales acordes con la normativa vigente ambiental y de recursos naturales en el país.
- 4.15 Además, la cooperación técnica paralela a este proyecto incluye actividades de capacitación en temas ambientales, que serán incorporadas en los currículos y programas de capacitación de la Escuela Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública.

E. Impacto en la Mujer y el Niño

- 4.16 Legislación sobre Violencia Doméstica. El componente de Modernización del Derecho incluye la elaboración de legislación apropiada contra la violencia doméstica. La violencia doméstica en Honduras es un problema endémico que afecta a todos los estratos sociales, pero principalmente a las mujeres de bajos recursos. El Programa buscará apoyar los esfuerzos de la Fiscalía de la Mujer y de la AID en este campo, mediante las actividades descritas en el Capítulo II. Se espera que este proyecto produzca una legislación apropiada y la capacitación necesaria para permitir que el sector justicia responda en una manera efectiva a un problema que afecta directamente a las mujeres de todo el país.
- 4.17 Código del Niño. El Programa apoyará la puesta en vigencia del nuevo Código de la Niñez. Este nuevo código de la niñez, que fue preparado con un apoyo fuerte de UNICEF, toma en cuenta los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la doctrina de la protección integral. Este es un logro muy importante para Honduras y refleja cambios importantes en la política de tratamiento de menores infractores. Asimismo, el programa asegurará la difusión del nuevo código a los operadores de justicia y de las instituciones relacionadas y la capacitación correspondiente.

---

3/ Para los efectos se tomó en consideración el valor de los arriendos que han comenzado a cobrar las municipalidades y, se encargó a especialistas locales una estimación de los precios de arriendos, tanto para aquellas localidades que existen disponibilidades de establecimientos y/o para que terceros se interesaran en invertir en locales para arriendos.

F. Riesgos

- 4.18 El principal riesgo del Programa está determinado por las reformas legales que deberán llevarse a cabo a fin de poder cumplir satisfactoriamente con algunos de los objetivos descritos en los componentes respectivos. Siendo el Poder Legislativo el que debe aprobar tales reformas, existe la posibilidad de que no se obtenga consenso político suficiente para que las mismas sean ratificadas oportunamente. Ello demoraría la ejecución de otras actividades del Programa --por ejemplo, capacitación y difusión de la nueva legislación--. Sin embargo, este riesgo se ve aminorado por las siguientes razones: (i) el Gobierno ha asignado un alto grado de prioridad al mejoramiento de la administración de justicia, lo cual se refleja en las prioridades establecidas en el plan de la Comisión para la Modernización del Estado; (ii) la creación de la Comisión de Alto Nivel para la Modernización de Justicia, con el objetivo de impulsar reformas en el sector; y (iii) los partidos de la oposición, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho, el sector privado, y los demás sectores de la sociedad Hondureña han manifestado ya su apoyo a todas aquellas acciones dirigidas a mejorar el sistema de justicia.
- 4.19 Un segundo riesgo está relacionado con el subcomponente de infraestructura, donde los gastos de mantenimiento y personal requeridos para el funcionamiento de los Juzgados de Paz y Salas de Audiencia a ser construidos representan un incremento en los costos recurrentes del Poder Judicial en su conjunto. Este riesgo se ve disminuido por lo siguiente; (i) la historia presupuestaria del Poder Judicial ha sido analizada debidamente, estimándose que éste tendrá capacidad para absorber estos costos recurrentes; y (ii) el compromiso nacional para mejorar la administración de justicia, el cual hace que exista la voluntad política de otorgar el 3% del presupuesto nacional al Poder Judicial en 1997, lo cual consolidará la situación presupuestaria del mismo.

**PLAN DE OPERACIONES**  
**COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**DEL PODER JUDICIAL Y PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AL**  
**SISTEMA DE JUSTICIA**

(TC-95-04-06-1)

**RESUMEN EJECUTIVO**

**BENEFICIARIO:** El Gobierno de Honduras

**ORGANISMO EJECUTOR:** La Corte Suprema de Justicia por intermedio de la Unidad Ejecutora del proyecto HO-0109

**MONTO Y FUENTE:** US\$1.500.000 (FOE)

**PLAZOS:** Plazo de ejecución: 48 meses  
Período de desembolso: 52 meses

Condición: No reembolsable

**RESPONSABILIDAD:** La División de País del Departamento Regional de Operaciones 2 y la Representación del BID en Honduras

**OBJETIVOS:** Esta cooperación técnica será ejecutada en conjunto con el Programa de Modernización de la Administración de Justicia (HO-0109), en virtud del cual se aportará financiamiento al Poder Judicial por un monto de hasta US\$7,2 millones.

El objetivo de la cooperación técnica es elevar la eficiencia del poder judicial y permitir un mayor acceso de la ciudadanía a la justicia mediante el apoyo a las siguientes actividades: i) fortalecimiento institucional del poder judicial; ii) capacitación para el Ministerio Público; iii) capacitación para los defensores públicos, y iv) apoyo a los métodos alternativos para la solución de controversias en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social.

**DESCRIPCION:** El objetivo y los propósitos de este programa se lograrán llevando a cabo las actividades que constituyen los dos componentes de la operación:

**Fortalecimiento institucional.** El propósito de este componente es fortalecer los sistemas de planificación, administración, control e información del Poder

Judicial, así como fortalecer la capacitación y la gestión de recursos humanos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, con miras a elevar la eficiencia del sector justicia. Los resultados previstos son los siguientes: i) reorganización administrativa del Poder Judicial; ii) establecimiento de sistemas de gerencia administrativa (incluidos los automatizados y de información), planificación y gestión de recursos humanos en el Poder Judicial; iii) puesta en servicio de FOLIO VIEWS (sistema automatizado de jurisprudencia); iv) consolidación de la Escuela Judicial, y v) consolidación de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.

**Acceso a la justicia.** El propósito de este componente es facilitar el acceso a la justicia, especialmente de los ciudadanos de medios limitados, mediante las siguientes acciones: i) fortalecimiento de la Defensa Pública y los consultorios jurídicos, y ii) promoción de la institucionalización de métodos alternativos para la solución de controversias. Este componente dará los siguientes resultados: i) defensores públicos mejor capacitados, que trabajen en oficinas provistas del mínimo de equipo y de bibliotecas básicas que les permitan funcionar; ii) un proyecto piloto para establecer servicios de mediación en los consultorios jurídicos de la UNAH, y iii) aplicación más sistemática de los procedimientos de conciliación por la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social.

**BENEFICIOS:**

Se ha diseñado cada aspecto del programa con miras a facilitar el acceso a la justicia, especialmente de los grupos de ingresos más bajos. El programa elevará la eficiencia y eficacia del Poder Judicial, lo cual se traducirá en una administración más eficiente en términos de costos y más apta para responder mejor a las necesidades de la población. El apoyo a los programas de capacitación para defensores públicos y el Ministerio Público fortalecerá los servicios jurídicos que se ofrecen a la ciudadanía. El refuerzo de la labor de mediación y conciliación que realizan la UNAH y la Secretaría de Trabajo representará beneficios directos para los ciudadanos que no pueden pagar los servicios de abogados privados.

**CONDICIONES  
CONTRACTUALES  
ESPECIALES:**

Como condición previa al primer desembolso, el beneficiario deberá presentar a satisfacción del Banco: i) el nombre de la persona o personas que puedan representarlo en todos los actos relacionados



con la ejecución de los convenios de coordinación y ii) evidencia de que se han cumplido las condiciones previas al primer desembolso del Programa de administración de justicia.

## I. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

- 1.1 El programa de cooperación técnica tiene dos objetivos: i) fortalecer la eficiencia administrativo-gerencial del Poder Judicial y, por ende, aumentar la eficacia de la Corte Suprema y de todo el sector justicia, y ii) secundar programas y entidades nacionales que contribuyan a garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos de todos los niveles de ingresos.
- 1.2 Un programa de mejoramiento de la administración de justicia que sea integral debe incluir actividades destinadas a perfeccionar la gestión judicial, proporcionar capacitación para jueces y otros funcionarios judiciales y emprender proyectos que ofrezcan métodos alternativos para la solución de controversias. El Programa de Modernización de la Administración de Justicia de Honduras estaría incompleto sin esta operación de cooperación técnica, que complementa y fortalece las actividades que se financiarán con el préstamo para el proyecto HO-0109.

## II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### A. Actividades

- 2.1 Esta cooperación técnica tiene dos componentes principales: i) fortalecimiento institucional y ii) acceso a la justicia. Estos dos componentes respaldarán programas estratégicos de los organismos y departamentos nacionales que llevan a cabo importantes trabajos en el sector judicial de Honduras: Corte Suprema, Ministerio Público, Programa de la Defensa Pública, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Secretaría de Trabajo y Bienestar Social.
- 2.2 Los términos de referencia para los contratos que requerirán las actividades propuestas para cada componente aparecen en el Apéndice B de este documento. Se ha decidido, con los beneficiarios de la cooperación técnica, que las estimaciones de necesidades de profesionales (número, calificaciones, etc.) incluidas en los términos de referencia son solamente preliminares y pueden variar de acuerdo con los planes de trabajo que se elaboren en conjunto con la Unidad Ejecutora. Cualquier enmienda necesaria será acordada en conjunto

entre el beneficiario, el Banco y el director de la Unidad Ejecutora.

1. Fortalecimiento institucional

2.3 El fortalecimiento institucional del Poder Judicial implicará el uso de servicios de consultoría en los aspectos que se describen a continuación:

- a) **Eficiencia organizacional.** Una firma internacional especializada en sistemas gerenciales y organización llevará a cabo una evaluación orgánica del Poder Judicial, la cual incluirá un examen de los actuales sistemas de planificación, formulación presupuestaria, recursos humanos e información. El resultado final será una propuesta de ejecución de acciones tendientes a solucionar los obstáculos administrativos, maximizar los recursos humanos disponibles, analizar la posibilidad de privatizar ciertos servicios y presentar un plan de reorganización para ser implantado por la Unidad Ejecutora.
- b) **Sistema integrado de recursos humanos, nómina de pagos e información.** El actual sistema gerencial automatizado (MUNIS) del Poder Judicial no facilita, al parecer, el trabajo diario ni las posteriores actividades de programación y planificación que deben realizarse. Se analizarán el sistema y su adecuación a las necesidades del Poder Judicial y se recomendará el diseño e implantación de un eficaz sistema integrado de personal y gestión administrativa.
- c) **Sistema automatizado de jurisprudencia.** Este sistema (FOLIO VIEWS) necesita actualmente ciertos ajustes técnicos, ampliaciones y equipos de computación adicionales para ofrecer una mayor facilidad de uso a los usuarios. Esta labor también estará complementada por cursos de capacitación y manuales adecuados para todos los usuarios.
- d) **Escuela judicial.** La firma consultora descrita en el párrafo a) llevará a cabo un análisis organizacional básico de la Escuela Judicial y presentará recomendaciones para una estructura más adecuada. Tal recomendación irá acompañada de planes académicos basados en grupos ocupacionales definidos que incluyan a jueces, personal asesor y empleados auxiliares y administrativos. Para asegurar que la nueva estructura sea eficaz, se formará un grupo asesor y se comprarán los materiales y equipos necesarios.
- e) **Mejoramiento de los medios de capacitación en el Ministerio Público.** Se reorganizará la actual unidad de capacitación para transformarla en un centro de recursos más eficiente. Los planes académicos estarán definidos a base de las descripciones

de cargos y las necesidades de los grupos ocupacionales. Se diseñarán cursos modulares y se comprarán los materiales de lectura y suministros de oficina que sean apropiados. Se ofrecerá la capacitación mediante el financiamiento del plan académico que se elabore y se implantará un sistema de evaluación.

## 2. Acceso a la justicia

2.4 Las actividades de apoyo directo a este componente implican el uso de servicios de consultoría en los aspectos que se describen a continuación:

a) **Programa de Defensa Pública.** Como parte de la iniciativa de la USAID, el número de defensores públicos se duplicó en Honduras, llegando a 105 en 1995. Se desarrollará una intensa labor de capacitación, para la cual habrá que programar e implantar 16 cursos especializados, durante los tres años del período, en distintas regiones del país. Se prepararán y distribuirán al público folletos informativos sobre la función que cumple el Defensor Público y cómo puede recibirse esta asistencia. Se procederá a adquirir equipos básicos de oficina y una biblioteca especializada para apoyar y garantizar la viabilidad continua del esfuerzo de capacitación.

### b) **Métodos alternativos para la solución de controversias**

i) Proyecto piloto sobre mediación y conciliación – UNAH. En esta materia, las actividades consistirán en capacitar a los estudiantes del último año de derecho que proyecten trabajar en los consultorios jurídicos de la UNAH, para que sepan usar los mecanismos de mediación y conciliación. Consultores internacionales especializados dictarán dos cursos por semestre durante tres años. Se diseñará e implantará un sistema automatizado de seguimiento de casos para uso de los consultorios. Se comprarán equipos y mobiliario de oficinas para los consultorios jurídicos que atienden al público.

ii) Conciliación laboral en la Secretaría de Trabajo. El programa incluye financiamiento para aumentar la eficiencia y cobertura geográfica de las actividades de conciliación laboral que se efectúan actualmente. Un consultor internacional impartirá capacitación a grupos de 50 personas durante tres días en cuanto a métodos de conciliación laboral. Se elaborará e implantará un sistema de seguimiento de casos, y se comprarán mobiliario básico y equipos de oficina para las nuevas dependencias regionales que tendrán a su cargo las tareas de mediación y conciliación laboral.

### III. ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN

- 3.1 El beneficiario será el ejecutor directo de esta cooperación técnica, el cual actuará a través de la Unidad Ejecutora establecida en la Corte Suprema para la ejecución del Programa de Modernización de la Administración de Justicia (HO-0109), por acuerdo mutuo y de conformidad con los procedimientos del BID.
- 3.2 La Unidad Ejecutora cuenta con dos coordinadores técnicos, uno encargado de las actividades relativas al fortalecimiento institucional del Poder Judicial, y el otro, de las actividades descritas en el componente de acceso a la justicia. Cada institución que participe en el programa asignará una persona para encargarse de la ejecución de las actividades que financiará la operación de cooperación técnica; esta persona actuará como homóloga del coordinador de la Unidad Ejecutora durante la ejecución del programa de cooperación técnica. Esta misma persona será responsable, dentro de cada institución, de garantizar la ejecución de cada aspecto del trabajo.
- 3.3 Los servicios de consultoría para fortalecimiento institucional del Poder Judicial están interrelacionados entre sí y exigirán una minuciosa coordinación. Dichos servicios pueden dividirse en dos categorías: a) los que pueden iniciarse en forma simultánea y un tanto independiente, y b) los que han de coordinarse según un estricto calendario, dado que los resultados de un conjunto de servicios influirán en los del conjunto siguiente. Cada coordinador técnico de la Unidad Ejecutora tendrá la responsabilidad de verificar que los servicios de consultoría se lleven a cabo en la secuencia necesaria.
- 3.4 Los servicios de consultoría para los proyectos que correspondan al componente de acceso a la justicia pueden prestarse simultáneamente, ya que involucran a instituciones distintas y sus actividades no tienen relación entre sí. Por ejemplo, los proyectos relativos a mediación y conciliación pueden llevarse a cabo al mismo tiempo que el programa de capacitación para defensores públicos. El coordinador técnico de este componente fijará el calendario para la ejecución de cada proyecto en coordinación con su homólogo designado por cada institución.
- 3.5 Como parte del proceso de adjudicar contratos para servicios de consultoría, se pedirá a los potenciales consultores que presenten comentarios sobre los términos de referencia del trabajo para el cual fueron invitados a presentar propuestas. Esto le permitirá al coordinador técnico del componente de fortalecimiento institucional verificar que los eventuales consultores hayan entendido claramente

los objetivos, tareas y resultados que se requieren en las distintas áreas de consultoría.

Vigilancia y evaluación

- 3.6 La responsabilidad de la supervisión y evaluación de esta operación recaerá sobre la División de País del Departamento Regional de Operaciones 2 y sobre la Representación del BID en Honduras.

Plazos

- 3.7 El programa se ejecutará en coordinación con las actividades del préstamo propuesto para el proyecto HO-0109; por consiguiente, el programa ha de ejecutarse dentro de 48 meses de aprobada la cooperación técnica por el Banco. El plazo para el desembolso final expirará a los 52 meses de la misma fecha.

**IV. PRESUPUESTO**

- 4.1 El costo total de la operación asciende a US\$1.500.000, según el desglose del Cuadro I que aparece a continuación. El Banco contribuirá con una aportación no reembolsable de US\$1.500.000, que se cargará al Fondo para Operaciones Especiales. Los fondos de la contrapartida local serán aportados "en especie", principalmente para administración y ejecución de las actividades de la operación, en las cuales se incluye el financiamiento de personal que colaborará con la ejecución de las actividades de la operación, el espacio de oficinas y el funcionamiento de los equipos y mantenimiento de las oficinas.
- 4.2 Los recursos del Banco se desembolsarán de conformidad con los procedimientos del Banco, ya sea directamente desde la sede del BID o a través de su Representación en Honduras.
- 4.3 El presupuesto del proyecto se ejecutará según las siguientes categorías:

PRESUPUESTO DETALLADO (Equivalente en US\$)			
DESCRIPCION	IDB	Local 1/	Total
<b>A. Administración y Ejecución</b>		200,000	200,000
<b>B. Fortalecimiento Institucional</b>	1,044,600		1,044,600
- Análisis y Propuesta de Reorganización	170,000		170,000
- Implementación y Reorganización	50,000		50,000
- Evaluación de <u>MUNIS</u> (sistema integrado de gestión administrativo, presupuesto y recursos humanos.)	5,000		5,000
- Implementar un sistema nuevo o mejoramiento de MUNIS	50,000		50,000
- Capacitación	4,000		4,000
- Realce de <u>FOLIO VIEWS</u> (Sistema de Jurisprudencia)	20,000		20,000
- Preparación y transcripción de datos	50,000		50,000
- Capacitación	4,000		4,000
- Equipamiento para MUNIS y FOLIO VIEWS	58,400		58,400
- <u>Escuela Judicial</u> Fortalecimiento (Propuesta)	20,000		20,000
- Desarrollo de Curriculum	10,000		10,000
- Fortalecimiento Consejo Asesor	5,000		5,000
- Equipamiento, enseres, publicaciones y biblioteca	36,000		36,000
- Implementación/ejecución de Programas de Capacitación	260,000		260,000
- Fortalecimiento, Unidad de Capacitación del <u>Ministerio Público</u>			
- Propuesta para desarrollar un curriculum académico	20,000		20,000
- Diseño - Programa de Capacitación de cursos modulares	10,000		10,000
- Creación e implementación de un Consejo Asesor	5,000		5,000
- Publicaciones y Biblioteca de Referencia	35,000		35,000
- Implementación/ejecución de Programas de Capacitación	232,200		232,200
<b>C. Acceso a la Justicia</b>	455,400		455,400
- Fortalecimiento de la <u>Defensa Pública</u>			
- Capacitación	86,000		86,000
- Equipamiento y Biblioteca	65,500		65,500
- Folletos de información para el pública	17,500		17,500
- Proyectos piloto:			
- <u>Sistemas Alternativos de Solución de Conflictos</u>			
- Capacitación estudiantes de derecho (UNAH)	48,000		48,000
- Implementación sistema de seguimiento de casos	10,000		10,000
- Equipamiento de Oficina	59,200		59,200
- Biblioteca de Referencia	5,000		5,000
- Capacitación en el Ministerio de Trabajo	100,000		100,000
- Implementación de sistema de seguimiento de casos	10,000		10,000
- Equipamiento de Oficina	49,200		49,200
- Biblioteca de Referencia	5,000		5,000
<b>TOTAL</b>	1,500,000		1,500,000

1/ "In-kind".

## V. INFORMES

- 5.1 Los consultores o firmas consultoras que se contraten para realizar las tareas descritas en este plan de operaciones, cuyos términos de referencia se resumen en los Anexos A y B de este documento, presentarán sus informes en español al director de la Unidad Ejecutora, quien a su vez lo remitirá al Banco y a las instituciones beneficiarias. Los beneficiarios y el coordinador de la Unidad Ejecutora que sea responsable del componente respectivo revisarán los informes y el Banco los aprobará.
- 5.2 El Director de la Unidad Ejecutora debe presentar los siguientes informes al Banco y a los beneficiarios:
  - a. Un plan de trabajo detallado que contenga un programa completo de las actividades y gastos que incluye esta operación. Dicho plan debe estar basado en el presente plan de operaciones y contener un cronograma detallado de ejecución de las actividades. El plan de trabajo comprenderá: i) una propuesta relativa a la organización, administración y programación de las actividades que se han de realizar; ii) cuestiones de coordinación y supervisión a que dé lugar la implantación del programa; iii) requisitos y condiciones para seleccionar a los contratistas, y iv) plan para la metodología que se usará para realizar la evaluación periódica de las actividades y la evaluación final de la operación.
  - b. Informes de mitad de período (cada seis meses) que contengan descripciones detalladas del trabajo realizado durante el período cubierto. Estos informes deben igualmente contener una descripción concisa del trabajo que debe llevarse a cabo durante el período siguiente, así como recomendaciones relativas a la forma en que se ha de proceder y los cambios que deben introducirse en la ejecución de esta operación.
  - c. Informe técnico final: Sobre la base de los informes de progreso presentados al Banco y durante el mes siguiente a la terminación de la ejecución de la cooperación técnica, el Coordinador de la Unidad Ejecutora presentará un informe final en el que se describirán en forma resumida los resultados de la operación y el grado en el que se hayan alcanzado las metas propuestas de la operación.

## VI. OBJETIVOS DE LAS CONSULTORÍAS

- 6.1 Los objetivos de las consultorías que se describen a continuación ofrecen una descripción general de los propósitos de cada actividad que se financiará con cargo a esta cooperación técnica, según el detalle que aparece en el Cuadro II de este documento. Los términos de referencia específicos aparecen en los Anexos A y B de este documento. El Anexo A contiene un Cuadro Resumido de Consultores y de los días laborables requeridos, para los consultores nacionales e internacionales, así como las actividades que se han de llevar a cabo y los resultados previstos. El Anexo A describe las funciones de las consultorías y los términos de referencia específicos en los que se indican los requisitos de calificaciones académicas y competencia profesional.

### 1. Fortalecimiento institucional del Poder Judicial

#### a. Evaluación organizacional y reestructuración del Poder Judicial

**Objetivo:** Empezar una completa evaluación organizacional del Poder Judicial en términos de sistemas gerenciales y políticas en las áreas de gestión de personal, formulación presupuestaria y administración, adquisiciones, sistemas de información y administración general, con el objeto de maximizar los recursos mediante la redefinición de los volúmenes de trabajo y los requisitos de personal, la descentralización de ciertas funciones, la contratación de servicios específicos prestados por firmas externas y la revisión de leyes que deban ser actualizadas para implantar las modificaciones que permitirán instrumentar una administración más eficiente. Junto con las recomendaciones resultantes de esta evaluación debe presentarse un plan de reorganización administrativa que vaya acompañado de una descripción de costos y beneficios, y que contemple la transferencia de funciones administrativas de los magistrados de la Corte Suprema a un organismo administrativo apropiado. Una vez aprobada la reorganización por los magistrados de la Corte Suprema, se contará con recursos para desarrollar sistemas gerenciales e implantar las modificaciones recomendadas en la evaluación.

#### b. Sistema integrado de información sobre recursos humanos, presupuestos y gestión administrativa

**Objetivo:** Evaluar el actual sistema de gestión administrativa y de personal (MUNIS) a fin de decidir si conviene ampliarlo e impartir mayor capacitación en cuanto a su uso o bien proponer la adquisición o diseño de un nuevo sistema



que esté adaptado expresamente a las necesidades que establezca la evaluación organizacional. La evaluación debe incluir un análisis detallado de costos y beneficios de las opciones propuestas.

c. Ampliación del sistema automatizado de jurisprudencia (FOLIO VIEWS)

**Objetivo:** Evaluar el sistema automatizado de decisiones judiciales (FOLIO VIEWS) y determinar qué modificaciones pueden facilitar su uso y hacerlo más valioso para los usuarios del sector judicial. Esta acción puede requerir la adaptación del sistema al idioma español y la transcripción de todos los datos. La evaluación debe incluir una descripción detallada del trabajo que se requiere realizar en el sistema en los dos últimos años y un plan de cursos de capacitación para asegurar que los usuarios utilicen el sistema en su plenitud.

d. Fortalecimiento de la Escuela Judicial

**Objetivo:** Evaluar el funcionamiento actual de la escuela y desarrollar una propuesta para perfeccionar su organización y eficiencia, a fin de atender las necesidades del Poder Judicial en materia de capacitación. La propuesta ha de incluir el desarrollo de un nuevo plan de estudios para la escuela según los perfiles ocupacionales y el concepto de cursos modulares. Deberán revisarse y actualizarse los lineamientos de política relativas al funcionamiento del Consejo Judicial y el grupo asesor de la Escuela Judicial.

e. Fortalecimiento de la unidad de capacitación del Ministerio Público

**Objetivo:** Llevar a cabo una evaluación orgánica de la unidad de capacitación del Ministerio Público y proponer una estructura que responda mejor a las necesidades de su personal, cuyo número aumenta rápidamente. La propuesta incluirá asimismo la elaboración de un plan de estudios basado en perfiles ocupacionales y en el concepto de cursos modulares. Finalmente, deberán presentarse recomendaciones para la creación y funcionamiento de un grupo asesor para la unidad de capacitación recién organizada.

2. Acceso a la justicia

a. Fortalecimiento de la Defensa Pública

**Objetivo:** Desarrollar un programa de adiestramiento y un plan de estudios que asegure la capacitación oportuna y

eficaz de los 105 defensores públicos que hay actualmente en todo el país. También se pedirá a los consultores que preparen folletos descriptivos de los servicios prestados por los defensores públicos y el acceso de la ciudadanía en general a estos servicios; junto con la preparación de los folletos deberá incluirse un plan para distribuirlos a fin de que se les dé la difusión más amplia posible.

b. Proyecto piloto sobre métodos alternativos para la solución de controversias

**Consultorios jurídicos de la UNAH.** **Objetivo:** Desarrollar un programa eficaz de capacitación para los estudiantes del último año de derecho, que les imparta los conocimientos esenciales y destrezas necesarias en materia de mediación y conciliación. Los consultores deberán asimismo desarrollar un sistema de seguimiento de casos, que sirva para apreciar los resultados de los procedimientos de mediación y conciliación realizados, con la posibilidad de consultar la información clasificada por sexo y por distintos niveles de ingreso.

**Secretaría de Trabajo.** **Objetivo:** Elaborar cursos de capacitación para aproximadamente 50 funcionarios de la Secretaría que trabajan directamente en la conciliación de casos laborales en todo el país. Este programa de capacitación debe tomar en cuenta los distintos niveles educativos del personal de la Secretaría que trabaja en esta área y el hecho de que la capacitación se impartirá también a funcionarios de oficinas nuevas situadas fuera de las zonas metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro. La consultoría establecerá asimismo un sistema de seguimiento de casos, que permita medir los resultados de los trabajos de conciliación y proporcionar información clasificada por sexo y por distintos niveles socioeconómicos.

PLAN ANUAL DE TRABAJO: AÑO 1

ACTIVIDADES	TRIMESTRE			
	1	2	3	4
<b>C1. Componente de Modernización del Derecho</b>				
1.1.1 Establecimiento de comisión redactora de la nueva Ley Orgánica de Tribunales.			X UE	X→ UE
1.2.1 Establecimiento de comisión redactora de la nueva Normativa sobre Jurisdicción Constitucional	X UE	X UE	X UE	X→ UE
1.3.1 Establecimiento de comisión redactora del Nuevo Código de Procedimientos Civiles	X UE	X UE	X UE	X UE
1.4.1 Diseño de un programa de capacitación por cursos modulares, para el Nuevo Código de la Niñez.				X EJ UCMP
1.4.2 Difusión y capacitación: Impresión de nuevo Código y cursos para los operadores de la Justicia.	X PJ , PL	X PJ,PL	X PJ,PL	X→ PJ,PL
1.5.1 Elaboración de un diagnóstico de la situación existente en el campo para la elaboración de legislación sobre Violencia doméstica..	X UE			
1.5.3 Establecimiento de comisión redactora, Nueva Legislación sobre Violencia Doméstica.		X UE	X UE	
1.5.4 Promoción del consenso para nueva ley sobre violencia doméstica				→
1.6.1.1 Establecimiento de Comisión Redactora de la Nueva Ley que favorezca inversiones.	X CHEP	X CHEP	X CHEP	X→ CHEP
1.6.3 Estudios y proyectos de Ley que fomenta la Inversión.				

ACTIVIDADES	TRIMESTRE			
	1	2	3	4
<b>C2. Componente Fortalecimiento de la eficiencia del Sector Justicia</b>				
2.1.1 Elaborar una propuesta que presenta alternativas de solución para optimizar recursos, redefinir cargas laborales, número de personal, descentralizar funciones, analizar la posibilidad de privatizar servicios y evaluar las leyes que deben ser modificadas para la implementación de una administración ideal. En este análisis se debe prestar especial atención a la escuela judicial.				
2.1.3 Ejecución de la propuesta del 2.1.				
2.2.3 Equipamiento necesario para funcionamiento de MUNIS y FOLIO VIEWS				
2.4.1 Análisis sobre la estructura, organización y funcionamiento de la Escuela Judicial.	X PJ,MP CI	X PJ,MP CI	X PJ,MP CI	
2.4.2 Desarrollo de una propuesta para mejorar la eficiencia y cobertura de la Escuela Judicial.				X MP,CI
2.4.3 Definición de un curriculum académico con base a los perfiles ocupacionales del personal judicial(Jueces, personal auxiliar judicial y personal de apoyo)			X PJ,MPD P	X→ PJ,MP DP
2.4.4 Diseño e implementación de un plan de capacitación basado en curso modular para el fortalecimiento de la Escuela Judicial..			X UE,CI	X→ UE,CI
2.4.5 Integración de un grupo de asesores para la Escuela Judicial.			X UE	X→ UE
2.4.8 Sistema de seguimiento programa de capacitación.			X	X→
2.5.1 Análisis sobre la estructura organización y funcionamiento de la Unidad de Capacitación.	X MP,PJ	X MP,PJ	X MP,PJ	X MP,PJ
2.5.2 Desarrollo de la propuesta para el Fortalecimiento de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.			X UE	X→ UE
2.5.3 Definición de un curriculum académico con base a los perfiles ocupacionales de los fiscales			X MP,PJ	X→ MP,PJ
2.5.4 Diseño e implementación de un plan de capacitación basado en cursos modulares para funcionarios del Ministerio Público.				X→ UE,CI
2.5.5 Integración de un grupo de asesores para la Unidad de Capacitación.				X→ MP,PJ CI

ACTIVIDADES	TRIMESTRE			
	1	2	3	4
<b>C3. Componente de Acceso a la Justicia</b>				
3.1.1 Capacitación de defensores dentro del fortalecimiento de la defensa pública.		X EJ,DP, MCDP	X EJ,DP MDCP	X→ EJ,DP MCDP
3.1.2 Equipamiento de las oficinas de Defensa Pública.	X UE,EP	X UE,EP	X UE,EP	X UE,EP
3.2.1.1 Capacitación a los estudiantes de los Consultorios en mecanismos de conciliación y mediación de conflictos.		X EJ	X EJ	X→ EJ
3.2.1.3 Equipamiento a las oficinas donde se desarrollará el proyecto piloto.			X UE,EP	X UE,EP
3.2.2.1 Capacitación a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo en técnicas de conciliación laboral.		X UE,MT	X UE,MT	X→ UE,MT
3.2.2.3 Equipamiento de las oficinas donde se desarrollará la experiencia			X UE,EP	X UE,EP
3.3.1 Difusión del Servicio.		X UE	X UE	X→ UE
3.3.2 Capacitación de árbitros.				
3.3.4 Diseño planificación y licitación de Juzgados de Paz	X UE	X UE		
3.4.3 Diseño planificación y licitación de Salas de Audiencia	X UE	X UE		
3.4.4 Construcción de Juzgados de Paz			X UE	X→ UE
3.5.2 Evaluación del componente			X CAN	X→ CAN
<b>Ejecución del Programa</b>				
Unidad Ejecutora				

**PLAN ANUAL DE TRABAJO: PERIODO 0**

ACTIVIDADES	TRIMESTRE	
	1	2
<b>Ingeniería y Administración</b>		
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora entidad encargada de administrar, coordinar y supervisar la ejecución del Proyecto.	X	X
<b>Plan de Costos</b>		
Equipamiento de la UEP	X LP,LPN	X LP,LPN
Compra de mobiliario UEP	X LP,LPN	X LP,LPN
Equipo de cómputo	X LP,LPN	X LP,LPN

**EXPLICACIÓN GENERAL DE LAS ABREVIACIONES**

<b>CAN</b>	Comisión de Alto Nivel*
<b>CHEP</b>	Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
<b>CI</b>	Consultor Internacional
<b>DP</b>	Defensa Pública
<b>EJ</b>	Escuela Judicial
<b>EP</b>	Empresa privada
<b>LP</b>	Licitación Pública
<b>LPN</b>	Licitación Pública Nacional
<b>MCDP</b>	Magistrado Coordinador de la Defensa Pública
<b>MP</b>	Ministerio Público
<b>MT</b>	Ministerio de Trabajo
<b>PL</b>	Poder Legislativo
<b>PJ</b>	Poder Judicial
<b>UE</b>	Unidad Ejecutora

**Explicación de los signos**

- ⇒ Significa que la actividad continúa el siguiente año.
- \* La Comisión de Alto Nivel es el órgano asesor de la UE, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Ministro del Despacho Presidencial y Secretario Ejecutivo de la Comisión para la organización del Estado.

## MARCO LOGICO

### 1. COMPONENTE MODERNIZACION DEL DERECHO

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN:</b> Modernizar la legislación a fin de mejorar el clima de seguridad jurídica, promover la inversión y fortalecer el Estado de Derecho.	Que el país cuente con nuevas leyes que contribuyen al estado de derecho, la seguridad jurídica y un apropiado clima de inversiones	Publicación de dichas leyes en el diario oficial	Consenso político para aprobar los proyectos de ley desarrollados en este Programa y en un tiempo prudente según el cronograma de acción presentado
<b>PROPÓSITO:</b> En un término de 4 años producir instrumentos legales básicos que modernicen la actividad del Poder Judicial, la jurisdicción constitucional, procedimientos civiles, mejoren la condición y tratamiento jurisdiccional sobre menores, brinden protección contra la violencia doméstica y favorezcan el clima de inversiones.	1 Normativa para el Poder Judicial que permita su adecuado funcionamiento y que contemple entre otros: - Separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales - Delegación para que el Poder Judicial pueda definir el número de Jueces y Tribunales que requiere el país. - Descentralización de funciones - Despolitización en el nombramiento y permanencia de Jueces y funcionarios Judiciales 2. Mecanismo fácil y expedito para la presentación de recurso de Amparo, Hábeas Corpus e Inconstitucionalidad. 3. Incremento en la presentación de recursos de Hábeas Corpus, Amparo e Inconstitucionalidad. 4. Procedimientos civiles expeditos. 5. Reducción de los tiempos procesales en materia civil. 6. Jurisdicción de menores funcionando de acuerdo a lo dispuesto por el Código de la Niñez. 7. Aumento de jueces de menores, fiscales y defensores dedicados al tema. 8. Inclusión de la temática del menor y la violencia doméstica en el Plan de Estudios de la Escuela Judicial y la Unidad de Capacitación del M. Público. 9. Legislación especializada sobre violencia doméstica que contemple un tratamiento integral del problema. 10. Existencia de fiscales y defensores especializados en resolver casos de violencia doméstica.	- Presentación de las leyes al Congreso - Publicación de dichas leyes en el diario oficial - Realización de Seminarios de calificación según los alcances del programa - Estadísticas de inversiones de las cámaras y otros organismos del sector privado - Estadísticas de la sala constitucional que muestre una relación positiva entre las demandas ingresadas y las resueltas.  _ Estadísticas de la Escuela Judicial y el Ministerio Público	Aprobación por el congreso de leyes propuestas por el Programa

<b>PRODUCTOS ESPERADOS:</b> 1. Nueva Ley Orgánica de Tribunales 2. Nueva Ley sobre Jurisdicción Constitucional 3. Nuevo Código de Procedimientos Civiles 4. Legislación sobre violencia doméstica 5. Nuevo Código sobre la Niñez funcionando	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyectos de ley elaborados por comisiones especiales- Aprobación de leyes por congreso (sin la aprobación de las leyes no se puede continuar con las actividades siguientes)</li> <li>- Impresión y difusión de nuevas leyes.</li> <li>- Capacitación de los administradores de Justicia en las nuevas leyes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diario oficial</li> <li>- Estadísticas oficiales del Sistema Judicial</li> </ul>	Apoyo político para llevar adelante la aprobación de las leyes. mencionadas



**2. COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR JUSTICIA**

<b>RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS</b>
<b>FIN:</b> Mejorar la eficiencia de la estructura administrativa del Poder Judicial y la capacidad técnica de los recursos humanos del Sistema de Justicia.	Mejor utilización por el Poder Judicial de sus recursos humanos y financieros.  Recursos humanos estables e idóneas para la realización de sus funciones.	Sistemas y manuales de organización implementados.	
<b>PROPÓSITO</b>  En un plazo de 4 años fortalecer los sistemas de planificación, gestión y control, los sistemas de información, capacitación y el manejo de recursos humanos.	1. Eficaz funcionamiento de los procedimientos y sistemas administrativos: sistemas y manuales de organización implementados; automatización completa de procedimientos manuales.  2. Poder Judicial y Ministerio Público con recursos humanos mejor capacitados y estables que garanticen un manejo eficiente y transparente de la gestión judicial.	Evaluaciones externas.  Informes de labores del Poder Judicial y del Ministerio Público	Voluntad del Poder Judicial para aplicar cambios sugeridos y aplicar los procedimientos recomendados.  Apoyo del Poder Judicial y del Ministerio Público a la Escuela de Capacitación y a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.
<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>  1. Reorganización administrativa del Poder Judicial.  2. Sistemas de gestión administrativa, planificación y manejo de recursos humanos en operación  3. Funcionamiento del FOLIO VIEWS (Jurisprudencia)  4. Consolidación de la Escuela Judicial.  5. Consolidación de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.	Ejecución de consultoría y la implementación de las recomendaciones sugeridas. (nueva estructura)  Sistemas funcionando según recomendaciones.  Fortalecimiento de la capacidad del Poder Judicial para elaborar y ejecutar su propio presupuesto.  Recursos humanos seleccionados según carrera Judicial por una oficina de recursos humanos organizada técnicamente.  Sistema funcionando con transcripción completa de las sentencias y en uso por los Jueces.  Escuela Judicial y unidad de capacitación del Ministerio Público con un programa continuo y permanente de cursos de capacitación.	Evaluaciones externas.  Informes de labores del Poder Judicial y de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.	Disposición de la Corte Plena para delegar tareas administrativas, aplicar Carrera Judicial e implementar reformas.

**3. COMPONENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA**

<b>RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS</b>
<b>FIN:</b>  Facilitar el acceso a la justicia, especialmente para personas de escasos recursos.	Incremento de personas atendidas por servicios legales para personas de escasos recursos.  Grado en que el Sistema de Justicia ofrece mejores facilidades en términos de la disponibilidad de Juzgados de Paz en el país, y en la simplificación de procesos legales.	Estadísticas de la Defensa Pública y de los consultorios jurídicos.  Informes de labores del Poder Judicial  Evaluaciones externas.	Voluntad política para fortalecer estos servicios.
<b>PROPÓSITO:</b> En el término de 4 años fortalecer el sistema de defensores públicos y de consultorios jurídicos para personas de escasos recursos, así como promover la institucionalización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Igualmente promover el acceso a la justicia mediante la construcción de salas de audiencia para los nuevos procedimientos orales y juzgados de paz en los municipios del país.	1. Incremento del número de casos atendidos por la Defensa Pública en relación a la causas ingresadas. 2. Defensores Públicos capacitados y estables en el sistema. 3. Disminución de presos sin condena 4. Incremento de los casos atendidos por los Consultorios Jurídicos en conciliación y mediación con un éxito de resolución de un 70%. 5. 70% de los estudiantes de derecho de la UNAH de los últimos años de carrera , capacitados en conciliación y mediación 6. Incremento de los casos atendidos por la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social, en conciliación laboral con un éxito de resolución de un 70%. 7. 90% de los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social capacitados en conciliación laboral. 8. 4 Salas de Audiencia y 20 Juzgados de Paz construidos en el primer año. 9. 30 Juzgados de Paz construidos en el segundo año y 30 en el tercer año. 10. Incremento de la carga laboral en los Juzgados de Paz construidos. 11. Disminución en la duración de los juicios penales como consecuencia de la oralidad. 12. Nombramiento de Jueces de Paz letrados en los Juzgados construidos. 13. Presencia permanente o periódica de fiscales y defensores en los Juzgados de Paz construidos.	Estadísticas de la Defensa Pública.  Informes producto de los sistemas de seguimiento de causas instalados en la Defensa Pública, y la Secretaría de Trabajo.        Informes de supervisión de obras construidas        Evaluaciones externas.	

<p><b>R E S U L T A D O S ESPERADOS:</b></p> <p>1. Oficinas de la Defensa Pública con recursos humanos capacitados, con equipo y contando con material bibliográfico básico para su función.</p> <p>2. Proyecto piloto en los consultorios jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en conciliación y mediación.</p> <p>3. Fortalecimiento de la conciliación laboral en la Secretaría de Trabajo y Asistencia Social</p> <p>4. Construcción de Salas de Audiencia para procedimientos orales y Juzgados de Paz</p>	<p>Consolidación y fortalecimiento de la Defensa Pública</p> <p>Institucionalización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos en la UNAH y la Secretaría de Trabajo.</p> <p>Construcción de 4 salas de audiencia en Tegucigalpa; Construcción de por lo menos 80 Juzgados de Paz en las municipalidades del país.</p>	<p>Estadísticas de la Defensa Pública y evaluaciones externas.</p> <p>Informes producto de los sistemas de seguimiento instaladas y evaluaciones externas</p> <p>Informe de supervisión de obras del Poder Judicial</p>	<p>Respaldo del Poder Judicial a la Defensa Pública.</p> <p>Respaldo de la UNAH al proyecto piloto</p> <p>Respaldo continuo de la Secretaría de Trabajo al proyecto piloto</p>

PROYECTO DE RESOLUCION

HONDURAS. PRESTAMO /SF-HO A LA REPUBLICA DE HONDURAS  
(Programa de Modernización de la Administración de Justicia)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Honduras, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Modernización de la Administración de Justicia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$ 7.200.000, o su equivalente en otras monedas, excepto la de Honduras, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.

PROYECTO DE RESOLUCION

HONDURAS. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA  
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA JUDICIAL

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe para que proceda en nombre y representación del Banco a suscribir los acuerdos necesarios y a adoptar las demás medidas pertinentes para la ejecución del plan de operaciones a que se refiere el Documento \_\_\_\_\_ sobre cooperación técnica no reembolsable con la República de Honduras para el Fortalecimiento Institucional del Sistema Judicial. .
2. Destinar para los fines de esta resolución, hasta la suma de US\$1.500.000, o su equivalente, con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.